



### Pablo Garrido González

## HISTORIA DEL PARTIDO SOCIALISTA



### HISTORIA DEL PARTIDO SOCIA-LISTA

#### Autor:

Pablo Garrido González

Primera Edición; octubre 2025

### Diseño y Edición:

Rodrigo Belmar

### Portada y contraportada:

Camilo Bascuñán

EDITORIAL PRENSA LATINOAMERICANA PARÍS 873, SANTIAGO SANTIAGO DE CHILE



## **ÍNDICE**

Dedicatoria 6
I. El "Socialismo chileno" y los orígenes del Partido Socialista de Chile
II. ¡La revolución en marcha! La República Socialista y los años fundacionales 16
III. De la revolución socialista a la política socialista: el Frente Popular 28
IV. Las luchas intestinas: los gobiernos de coalición 37
V. El largo camino de la unidad: la estrategia del Frente de Trabaja- dores, el Frente de Acción Popular y la unidad socialista 48
VI. Una nueva senda para la revolución en América Latina. La radicalización durante la década de 1960 58
VII. La revolución chilena. El Partido Socialista y la Unidad Popular 69
Post Scriptum 83

#### Dedicatoria

A la memoria de mi abuelo, Guillermo González, quien me contó buena parte de esta historia; y de José Balaguer, por su trabajo incansable en favor de la memoria socialista.



## I. EL "SOCIALISMO CHILENO" Y LOS ORÍGENES DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

La pregunta sobre los orígenes históricos del Partido Socialista de Chile parece remitir a los orígenes del socialismo en el país, y en específico, al desarrollo de distintas ideas políticas reunidas en torno a la etiqueta del "socialismo chileno". Hablar de un "socialismo chileno" implica reconocer que la trayectoria y el desarrollo del socialismo en el territorio habría adquirido características propiamente "chilenas", otorgándole a estas ideas algunos rasgos distintivos que permitirían diferenciarlas tanto de corrientes políticas afines como de su matriz doctrinaria original. No obstante, esta constatación abre algunas preguntas que, aunque evidentes, resulta dificilísimo poder contestar en un pequeño volumen: ¿Cuáles son las particularidades del socialismo en Chile? ¿Qué tan distinto o semejante es su desarrollo comparado con otras experiencias latinoamericanas y europeas?

Sin intentar una respuesta acabada a estas preguntas, una primera aproximación implica reconocer que el desarrollo de la ideología socialista en Chile y el desarrollo del Partido Socialista de Chile corresponden a procesos distintos, aunque íntimamente vinculados. Aparecidas en el país finalizando el siglo XIX, las ideas socialistas tuvieron su primera expresión orgánica de importancia en 1897 con la fundación de la Unión Socialista. Inspirados en las ideas del "Socialismo Internacional" y en figuras del socialismo argentino como José Ingenieros y Leopoldo Lugones, la US contó entre sus filas con trabajadores sin filiación política previa y ex militantes del Partido Demócrata. Pronto la organización vivió polémicas y escisiones, dividiéndose en torno a diversas teorías, textos y autores que circularon bajo la amplia etiqueta del socialismo finalizando el siglo XIX.

Aunque de fugaz existencia, la US es señalada como la primera organización autónoma en adherir a los principios socialistas en Chile, generando con su escisión una embrionaria distinción entre corrientes que suscribieron a un socialismo de carácter evolutivo y otra cercana al socialismo revolucionario, de vertiente libertaria e inspiración ácrata, dando forma a una primera distin-

ción entre socialistas reformistas y socialistas revolucionarios. Si bien durante los años siguientes la organización de un "Partido Socialista Obrero" fue demandada por distintos grupos y liderazgos del incipiente movimiento obrero, la tendencia careció de un referente organizado de importancia y se mantuvo disgregada entre los partidos Radical, Democrático, el mundo mancomunal y las organizaciones sindicales hasta el año 1912, cuando el obrero tipógrafo y antiguo dirigente demócrata Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista. Por las vicisitudes de la guerra mundial y la experiencia de la revolución rusa el POS se transformó en Partido Comunista de manera oficial y completa en 1921, dejando al campo socialista sin una expresión política organizada.

Treinta y seis años después de la experiencia de la US, grupos marxistas, nacionalistas, indoamericanistas, sindicatos y diversos gremios fundaron el Partido Socialista de Chile detrás del liderazgo de Marmaduke Grove Vallejos, avezado conspirador, oficial de ejército, líder de la revolución de 1932 y jefe de la aviación militar que saltó a la popularidad por su rol en una efímera República Socialista de 12 días. La denominada "revolución de junio" fue recibida con júbilo por un importante grupo de la sociedad chilena afectada por la crisis económica registrada tras la I Guerra Mundial, y apoyada con entusiasmo por estudiantes universitarios, comunistas "disidentes", militares, disgregados grupos de sensibilidades socialistas, sindicatos, organizaciones de empleados y gremios profesionales, militantes del aprismo peruano en el exilio y viejos luchadores provenientes de la tradición anarcosindicalista.

Pese a ser breve e incompleto, el recuento demuestra que hablar de "socialismo chileno", más que referir a un conjunto compacto de ideas y prácticas, refiere a momentos, proyectos, liderazgos y organizaciones que adhirieron o promovieron alguna de las versiones del pensamiento socialista en el país. En definitiva, la etiqueta "socialismo chileno" refiere a tradiciones, movimientos y personajes cuya existencia pública antecedió y superó la ex-

periencia del Partido Socialista de Chile, pero que parecen estar estrechamente vinculados a su fundación y desarrollo.

Una revisión sucinta de algunas trayectorias militantes muestra que el Partido Socialista tiene parte de sus raíces en el socialismo que lo antecedió. El mismo gabinete de la República Socialista es expresivo de esta característica. Eugenio González, ministro de educación en 1932 fue dirigente de los estudiantes secundarios durante el crítico año 1920, presidente de la FECh en 1922 y adherente de la revolución comandada por Ibáñez y la juventud militar en 1925 desde la Unión Social Republicana de Asalariados. Marmaduke Grove, líder político, militar y espiritual de la revolución de junio, antes acompañó a Ibáñez en la rebelión de la oficialidad joven para luego transformarse en un activo conspirador en su contra. Carlos Alberto Martínez antes de ser ministro de tierras y colonización de la revolución de junio fue militante del POS, fundador de la FOCh y uno de los personajes centrales del proceso que culminó con la adhesión de la federación a la Internacional Sindical Roja en 1921.

El rol de dirigentes como Ramón Sepúlveda Leal y Manuel Hidalgo Plaza tienden a confundir aún más las trayectorias del periodo fundacional del Partido con el desarrollo del pensamiento socialista en Chile. Ambos pertenecieron a la generación que acompañó a Luis Emilio Recabarren en la fundación del POS y formaron parte del grupo dirigente que lo transformó en Partido Comunista. El nombre de Hidalgo, protagonista de la división comunista de 1931 y miembro fundador de la Izquierda Comunista, también vincula al PS con la tradición trotskista y demás disidencias aparecidas en el comunismo chileno después de 1922. Otros nombres, como el de Óscar Schnake, Alberto Balloffet y Augusto Pinto ligan al Partido con distintas tradiciones del anarquismo. El primero, antes de ser el organizador del socialismo, participó durante sus días de estudiante universitario del grupo responsable de la revista Claridad durante el tumultuoso año 1920. Balloffet, antiguo dirigen-

te zapatero "apolítico", también fue un conferencista callejero habitual durante las marchas del hambre lo que le costó ser enviado a prisión en el marco del polémico "proceso a los subversivos". Por último, el nombre de Augusto Pinto, miembro del primer Ateneo Obrero de Santiago y de las comunidades ácratas de Alejandro Escobar y Carvallo tiende a confundir la trayectoria del Partido con los orígenes mismos de la ideología socialista y su vertiente libertaria en el país.

La fundación del Partido Socialista de Chile en 1933 no debe entenderse como un punto de partida aislado, sino como el resultado de un proceso más largo en el que confluyeron experiencias militantes, trayectorias ideológicas, luchas sociales y experiencias de organización popular registradas desde los años finales del siglo XIX. Este proceso vincula al PS con la trayectoria misma de las ideas socialistas en el país, no obstante, la fundación del Partido también obedeció a un contexto especifico que explica su compleja fisonomía original, la organización de facciones y la convulsa vida interna que lo caracterizó durante buena parte del siglo XX.

Durante la década de 1930 el socialismo circuló como una etiqueta amplia, dando cuenta de nuevas versiones del pensamiento revolucionario y del marxismo socialista aparecido después de la Primera Guerra Mundial. No obstante, en el contexto de la crisis económica de 1929 el socialismo también construyó programas políticos y económicos, con reformas sociales y administrativas que tenían como denominador común una férrea oposición al liberalismo como doctrina económica y social. Cuestiones como la socialización, el corporativismo y la colectivización, con un lenguaje técnico-científico y basada en sistemas como el fascismo italiano, el corporativismo e ideas nacionalistas también circularon bajo la etiqueta del socialismo. Caracterizadas por un ánimo distributivo y colectivista que podría confundirlas con el socialismo de izquierdas, estas corrientes fueron enfáticas en señalar su rechazo a la revolución proletaria y la lucha de clases promovidas por

marxismo, pues, para estas visiones, es una doctrina disociadora, antinacional e interesada en la promoción de divisiones artificiales del cuerpo social. Durante toda la década el socialismo vivió un momento de popularidad de la mano de distintos programas de reforma económica, administrativa y bienestar social que en lo medular pretendían la aplicación de nuevas fórmulas para superar la lógica individualista y libre cambista en crisis, a través de medidas tendientes a reformar el sistema económico oligárquico e individualista mediante medidas socializantes y socialistas.

Este fue el contexto de las ideas en las que se forjó el PS y que explican su fisonomía y comportamiento interno hasta 1973. El Partido se transformó en una organización que, pese a su discurso revolucionario, clasista y anti-imperialista original, buscó dar cabida a las más variadas corrientes y doctrinas socialistas del periodo. Recogiendo, además, la tradición del pensamiento y la experiencia acumulada del movimiento obrero chileno desde prácticamente sus orígenes. El PS dio techo a un amplio grupo de ideas, que rápidamente se expresaron en tendencias, evidenciando a partir de ese momento un carácter ideológico poliforme y tolerancia para con las más diversas expresiones del pensamiento socialista de su tiempo. Aunque el socialismo como orientación ideológica -hasta nuestros días- no es exclusividad del Partido Socialista, es cierto que su fundación cambió la fisonomía de la discusión al respecto, dándole una expresión organizada clara y exitosa, que rápidamente colocó al PS como el gran referente del socialismo chileno.

Fiel a sus orígenes fragmentados, el socialismo chileno adquirió una fisonomía ideológica que lo distinguía de las expresiones socialistas preexistentes y lo transformó en una versión nacionalizada y nacionalista de la doctrina, con una lectura no dogmática del marxismo como orientación política que, lejos de considerarlo como un sistema de ideas inmóvil, rescató el influjo del devenir histórico y social. El PS despreció el socialismo internacional y la democracia burguesa, no obstante, marchaba con carteles de Pablo Iglesias

e iba a elecciones recordando las primeras gestas electorales de Luis Emilio Recabarren. Despreciaba el imperialismo soviético, la dictadura estalinista y tildaron el comunismo como una idea extranjerizante, sin embargo, se declararon leninistas y veían en la revolución rusa el gran referente de la revolución proletaria mundial. Se declaró antiimperialista e internacionalista, adhiriendo a un nacionalismo de carácter continental que dio forma a una posición continentalizadora y latinoamericanista completamente nueva basada en el indoamericanismo. El Partido Socialista de Chile es en sí mismo un fenómeno nacional que podría resultar contradictorio si se compara con partidos similares en otros territorios. Esto le otorgó una fisonomía ideológica distintiva y una identidad política propia, profundamente enraizadas en la realidad político social chilena y americana, otorgándole una originalidad que fue destacada desde temprano en el campo de las organizaciones afines a nivel internacional.



### II. ila revolución en marcha! la república socialista y los años fundacionales

El contexto en que se gestó la República Socialista de junio de 1932 estuvo marcado por una profunda crisis política, económica y social generada por los efectos de la Gran Depresión global de 1929 y la caída de la dictadura militar de Carlos Ibáñez del Campo en 1931. El retorno de los civiles al poder fue liderado por Juan Esteban Montero, presidente electo con el apoyo de una inédita coalición radical-liberal-conservadora que logró imponerse cómodamente al ex presidente Arturo Alessandri. La coalición pretendía restaurar la civilidad rota por años de intervención militar, presentándose al país con un programa sencillo que incluía la restauración de las libertades públicas y la solución de los problemas económico-sociales. Retornada la democracia volvieron a salir a la luz las corrientes, liderazgos y grupos que se mantuvieron en la clandestinidad o el exilio durante los días del ibañismo. Sin embargo, los años de represión redundaron en la desorganización y el fraccionamiento de los organismos obreros preexistentes. Tras el fin de la dictadura dos organizaciones reclamaron el nombre de Partido Comunista, mientras que en el movimiento anarquista la disgregación alcanzó niveles críticos producto de la relegación y la persecución. En paralelo, aparecieron distintas organizaciones políticas de orientación obrera, caracterizadas por su adhesión y simpatía a distintas corrientes del socialismo y el liberalismo de izquierdas aparecidos después de la Primera Guerra Mundial.

Pese a declarar intereses y principios comunes, los distintos grupos socialistas permanecieron desperdigados y no lograron organizar una corriente de opinión unitaria. Entre 1931 y 1932 se fundaron el Partido Socialista de Chile que apoyó la candidatura de Alessandri-, el Partido Socialista Independiente, El Partido Socialista Marxista que apoyó la candidatura del "comunista disidente" Manuel Hidalgo-, la estatizante Orden Socialista y la liberal de avanzada Nueva Acción Pública. Sus declaraciones de principios agitaban conceptos socialistas diversos que no estuvieron exclusivamente ligados a la izquierda, reclamando principios como el socialismo de "Estado", "funcional", "marxista" o sencillamente "revolucionario". En este contexto, la

unidad de los grupos socialistas se transformó en un asunto **polémico** y con **distintas interpretaciones**. Tratando de salvar estas diferencias el presidente del PSI Armando Corvalán llamó a un Congreso de unidad los primeros días de 1932, destacando que el nuevo Partido debería seguir principios **clasistas**, adherir a la concepción **materialista** de la historia, seguir una orientación **revolucionaria** y un programa con medidas tendientes a la **socialización de los medios de producción**.

Al Congreso asistieron, además del PSI, los napistas, los socialistas marxistas y emigrados españoles a cargo del Ateneo Pablo Iglesias de Santiago. Pese a que todos los presentes concordaron en los principios que informaban la unidad, la mayoría se negó a la fusión. No todo fue negativo, pues quedaba clara la comunidad de intereses y objetivos políticos perseguidos por estas agrupaciones recién formadas a la vida pública. Además, el Congreso dio origen al Partido Socialista Unificado, surgido de la fusión del PSI con un sector del PSM, que siguió existiendo como Partido después de la división.

En el contexto de la depresión económica mundial, los grupos socialistas se apresuraron a vaticinar el quiebre definitivo del régimen capitalista y la necesidad de remplazar su doctrina liberal-individualista con políticas colectivistas, orientadas hacia la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del aparato estatal. Considerando el origen internacional de los problemas económicos y el resultado local de sus consecuencias sociales, se extendió un ánimo nacionalista que simpatizó con la industrialización interna, la nacionalización de los capitales extranjeros y la denuncia de los tratos entre la oligarquía local y el capital internacional. Esto dio pie a una primera comunión que, más allá de las diferencias que aun prevalecían, permitió la articulación de un polo socialista, anti-oligárquico, nacional-antiimperialista y revolucionario que pese a casi no contar con representación política formal actuó con fuerza durante el Gobierno de Montero.

La administración de Montero estuvo caracterizada en lo político por la continuidad de una parte de la institucionalidad ibañista y en lo social por la profundización de los efectos económicos y sociales de la crisis mundial en Chile. Asumido para resolver la situación, su política de austeridad fiscal terminó por profundizar la precariedad, contribuyendo a extender el descontento y las expresiones de protesta. En septiembre de 1931, un grupo de suboficiales de la armada protestó contra un decretó que rebajaba sus salarios y exigió medidas contra la crisis arrestando a sus superiores y tomando el control de buques de guerra. La acción fue secundada por algunas organizaciones obreras, quienes lideradas por los comunistas comenzaron a llamar a la revolución social y a conferenciar con los amotinados. Sólo el estado de sitio y el espectacular bombardeo aeronaval de los buques amotinados logró conjurar una amenaza que para el Gobierno asumía los caracteres de una revolución. En diciembre de ese mismo año un contingente de obreros y soldados de clase intentaron tomar un cuartel del ejército en las cercanías de la ciudad de Copiapó. En represalia, la autoridad ayudada por civiles en uniforme fusiló sumariamente a dirigentes obreros y sociales en la ciudad de Vallenar, falsamente implicados en los hechos.

Durante el año 1932, golpeado por los hechos antes listados y empujado por la impopularidad y la desorganización de su coalición, el ejecutivo acusó distintos complots en su contra implicando a políticos opositores, militares activos, comunistas y antiguos aliados de Ibáñez en distintas maniobras orientadas a desestabilizar el Gobierno. Para conjurar el peligro la autoridad se valió de distintos estados de sitio, la creación de grupos paramilitares y la reorganización de la policía política de la dictadura con la excusa de **perseguir a una oposición** que, en opinión del presidente, se había vuelto un peligro para la existencia misma del Estado. La medida más polémica fue el retorno de reconocidos militares ibañistas al ministerio, quienes después de un corto periodo de desprestigio por su rol durante la dictadura volvían al gobierno con el beneplácito de la autoridad democrática, quien los convocaba a las

labores ministeriales para conjurar el peligro de una revolución social. La política represiva de Montero y su cercanía con los uniformados fue vista por la oposición socialista como una restauración de la dictadura, con el fin de devolver los grupos oligárquicos al poder y defender la continuidad del moribundo sistema capitalista.

La crisis del Gobierno de Montero se expresó en una marcada inmovilidad administrativa que limitó la acción de las autoridades principalmente a la política represiva. Por otra parte, la persistencia de la crisis popularizó la doctrina del socialismo como una solución colectiva para los problemas sociales derivados del fracaso mundial del libre cambio y la doctrina individualista, llegando a ser abrazada por radicales, demócratas, conservadores y hasta por el mismo Gobierno civilista en un desesperado intento por ampliar sus bases de apoyo hacia el heterogéneo grupo de partidos, gremios y organizaciones socialistas de reciente formación. La dramática situación se extendió hasta el día 3 de junio de 1932, cuando aviones de guerra arrojaron panfletos sobre el palacio de La Moneda anunciando la revolución socialista para el día siguiente. El día 4 las amenazas se cumplieron cuando desde la base aérea El Bosque un grupo de soldados y oficiales, en compañía de exmilitares y civiles, llegaron al Palacio de Gobierno exigiendo la dimisión inmediata del presidente.

La República Socialista fue proclamada en relativa tranquilidad y sin derramamiento de sangre bajo la promesa de reemplazar el sistema capitalista en crisis y la dominación oligárquica, provocando la algarabía de los "trabajadores manuales e intelectuales" convocados en su apoyo. Sin embargo, los conspiradores formaban una incómoda mezcla de antiguos colaboradores de la dictadura y opositores a la misma, izquierdistas, nacionalistas, militares en retiro y en servicio activo, que ahora asumían labores de gobierno agitando un socialismo más bien económico y estatalista que fue explícito en rechazar cualquier tendencia "extremista" y "comunista". Las tendencias socialistas, con salvedad de la NAP, no participaron de la conspiración ni sus preparativos, no obstante, vieron en el socialismo de la junta una corriente capaz de responder a sus propias inquietudes. Si bien se lanzaron a la calle para apoyar la labor del nuevo gobierno una vez terminadas las restricciones sobre las libertades de prensa y reunión, desde los comicios callejeros los grupos también se mostraron recelosos ante la presencia de Ibañistas en la junta y las alocuciones anticomunistas, por lo que decidieron condicionar sus apoyos al desarrollo del programa y la aplicación del "socialismo integral".

En términos generales, la inclinación de la junta hacia el socialismo buscó apoyos en el conjunto de las fuerzas opositoras al gobierno de Montero, incluyendo a los partidos de reciente formación que se definían por una laxa posición izquierdista y la adhesión a distintas versiones del pensamiento socialista. Además de los grupos socialistas antes listados, esta descripción incluía al Partido Democrático, el recién fundado Partido Radical Socialista, el Partido Socialista de Chile y el tradicional Partido Radical, quienes pese a situarse en veredas distintas durante el gobierno de Montero vivieron sus propios virajes hacia el socialismo como orientación doctrinaria frente a la crítica situación política y la permanencia de la crisis económica y social. Si bien al interior de la junta todos estaban de acuerdo en la necesidad de remplazar el régimen oligárquico-capitalista, también se registraron invocaciones encontradas sobre el socialismo. Mientras Grove y el napista Matte Hurtado recibieron el apoyo de las manifestaciones callejeras más exaltadas, donde se exigían cuestiones como la nacionalización de la banca, el control obrero de la producción y otras medidas orientadas a empujar el socialismo integral, Carlos Dávila, antiguo embajador de Ibáñez en EE. UU., perfilaba que la República Socialista escribiría una nueva constitución basada en experiencias como la República Española y el socialismo corporativo europeo.

La revolución de junio fue apoyada por una marea popular que se volcó a las calles para celebrar medidas como la devolución de los artículos empeñados

en la caja de crédito prendario, la clausura del parlamento en funciones desde los días de la dictadura y la amnistía de los presos políticos del régimen anterior. Sin embargo, desde las manifestaciones también se comenzaron a exigir medidas más avanzadas y revolucionarias, capaces de poner un final definitivo al moribundo régimen económico social que hizo caer al civilismo. Los grupos socialistas se organizaron en distintos comités revolucionarios para exigir el cumplimiento del programa y la liquidación del régimen, mientras que el Partido Comunista se distanció de las nuevas autoridades acusando el movimiento como un golpe militar fascista y señalando que con Grove y Dávila eran los militares ibañistas los que retornaban al poder. Pese a las distancias que separaban a las figuras de Grove y Matte de las corrientes revolucionarias más exaltadas, su actitud para con los manifestantes encendió las alarmas de los grupos moderados al interior de la junta, quienes pronto comenzaron a acusar a los ministros de ser agitadores comunistas. La tensión alcanzó su punto culmine el día 16 de junio, cuando un nuevo movimiento incruento depuso a Grove y Matte con la finalidad de retornar el orden público y salvar a la República Socialista de una desviación bolchevique.

Pese a presentarse como una continuidad del experimento socialista iniciado el 4 de junio, las nuevas autoridades, encabezadas por Carlos Dávila, decretaron el estado de sitio y llamaron a una asamblea constituyente que nunca llegó a realizarse. Durante los 3 meses que duró el gobierno se mantuvieron prohibidas las manifestaciones públicas, se persiguió a las organizaciones obreras y se realizaron distintas maniobras para reponer a Ibáñez en el poder. Dávila intentó sin éxito rearticular la tendencia socialista en torno a su gobierno, llamado a napistas, socialistas de Chile, demócratas, la Orden Socialista y a los partidos radical y radical-socialista. Si bien las gestiones tuvieron un tímido éxito al principio, el retorno de Ibáñez al país dejó al gobierno prácticamente solo y caído en la impopularidad. El 13 de septiembre el autodesignado presidente provisional Carlos Dávila, fue depuesto por un nuevo golpe militar, esta vez, la intención de los uniformados era volver al

**normal tránsito democrático** convocando a *elecciones generales* para noviembre de 1932.

Las elecciones fueron el primer espacio para la unidad de las facciones socialistas que salieron en apoyo de la primera junta de gobierno, proclamando como candidato presidencial a Marmaduke Grove, quien estaría ausente durante toda la campaña por encontrarse relegado en la Isla Pascua. En torno a los trabajos de campaña se encontraron los miembros de la Alianza Revolucionaria de Trabajadores, organismo creado durante los días de la revolución con el concurso del PSU, los comunistas disidentes, el PSM y la Acción Revolucionaria Socialista junto a gremios profesionales y obreros. Los Grovistas reeditaron las imágenes de algarabía popular registradas durante los días de la primera junta de gobierno, organizando sendos comicios públicos en apoyo del candidato y agitando un programa sencillo, pero ya conocido por la opinión pública: retomar la revolución y el programa socialistas iniciados el 4 de junio. El candidato Grove y su colaborador Eugenio Matte volvieron al continente el mismo día de la elección, siendo recibidos por manifestaciones populares que los siguieron desde su llegada al puerto de Valparaíso hasta el edificio de La Opinión en Santiago. Para los socialistas no importó que las elecciones hayan finalmente dado por vencedor al candidato Arturo Alessandri, pues estimaban que después del 4 de junio la revolución socialista estaba en marcha.

La presidencia de Alessandri, pese al pasado anti-oligárquico y el discurso "izquierdista" que caracterizó al líder liberal durante las elecciones, estuvo caracterizada por distintas medidas represivas orientadas a restaurar el orden político, terminar con las intervenciones militares en política e iniciar, de una vez por todas, un tránsito democrático-institucional bajo los fundamentos constitucionales de 1925. La administración asumió una posición defensiva destinada a parar cualquier intento revolucionario, valiéndose para este fin del estado de sitio y la utilización de los cuerpos paramilitares creados du-

rante los días críticos del Gobierno civilista. En abril de 1933, el Gobierno decretó el estado de sitio, desatando una represión que afectó especialmente a la oposición socialista, enviando a la cárcel al líder Marmaduke Grove -un antiguo colaborador de Alessandri en sus días conspirativos contra Ibáñez- y desaforando al senador Eugenio Matte Hurtado, electo durante las elecciones generales del año anterior. La situación represiva catalizó los esfuerzos unitarios de los grupos socialistas, quienes decidieron en una sesión de emergencia celebrada el 19 de abril 1933 fundar el Partido Socialista de Chile.

El nuevo Partido recogió la experiencia de la República Socialista y asumió un discurso anti-oligárquico, nacional-antiimperialista y anti-status quo que dio continuidad al tono vanguardista y revolucionario que caracterizó el movimiento de junio. El PS pronto se denominó como "la revolución en marcha", reclamando una impronta de avanzada que lo distanciaba de los partidos políticos tradicionales y una orientación nacionalista-indoamericana que lo alejaba tanto del comunismo como del socialismo "internacional" de raíz socialdemócrata. El vanguardismo de la nueva organización fue refrendado con un nuevo estilo de movilización política y de convocatoria popular, que incluyó llamados a la formación de grupos de autodefensa contra las fuerzas paramilitares del Gobierno y del nacismo nacional, intentando superar la desorganización que siguió a la dictadura convocando al conjunto de los "trabajadores manuales e intelectuales" a lograr su "emancipación integral" sumándose a las huestes de la organización. El Partido también logró una temprana y exitosa inserción en el entramado de sindicatos legales heredado por la dictadura, lo que le permitió acrecentar rápidamente su influencia entre los trabajadores en desmedro de los divididos comunistas, los contrariados grupos demócratas y los desorganizados anarquistas, quienes pudieron hacer poco más que denunciar al Grovismo como una tendencia militarista, personalista y hasta "proto fascista".

Durante sus primeros años el PS mantuvo la vocación de masas y el programa revolucionario que caracterizaron a la República Socialista, definiendo durante su primer Congreso General de 1933 la creación de una "República Democrática de Trabajadores Manuales e Intelectuales" como finalidad política del Partido. Sus principales propuestas incluían la expropiación del capital monopólico, la abolición del latifundio, la nacionalización de los recursos naturales, la planificación estatal de la economía y una postura firme frente al imperialismo financiero, configurando una plataforma programática que combinaba elementos marxistas clásicos con un lenguaje nacional-popular que le permitió conectar con un amplio espectro de actores sociales y movilizar a obreros urbanos, campesinos y sectores medios radicalizados. Estas definiciones contribuyeron a dibujar una identidad política propia que en los años siguientes permitió el ingreso de militantes provenientes de tradiciones políticas distintas -comunistas disidentes, anarcosindicalistas, radicales y reformistas- detrás de principios y referentes políticos novedosos.

Las formas de convocatoria y movilización popular no se agotaron en la disputa por la representación sindical. Como organización nacida en los márgenes de la institucionalidad democrática y con una marcada orientación revolucionaria, el PS durante sus primeros años participó activamente en *huelgas, manifestaciones callejeras, campañas por los derechos laborales y jornadas antifascistas*, promoviendo una estrategia de movilización social sostenida y una denuncia callejera permanente contra el sistema oligárquico-capitalista. Hasta 1938 el discurso socialista presentó un carácter *combativo y de masas*, que se valió de la movilización social y la formación ideológica de sus cuadros para configurar una estrategia política abiertamente crítica del electoralismo y sospechosa de las posibilidades transformadoras del ejercicio político dentro de las instituciones representativas. El estilo de convocatoria popular del PS no se agotó en los llamados a la huelga y la protesta callejera, incluyendo la formación de milicias que se transformaron en verdaderas expresiones orgánicas del carácter revolucionario del Partido. Creadas ori-

ginalmente para defender los locales partidarios, los actos públicos y repeler los ataques de milicias contrarias -grupos nacistas, comunistas y la represión gubernamental- pronto se transformaron en mucho más que simples grupos defensivos.

Las Milicias Socialistas y sus "camisas de acero" se transformaron en el símbolo de la vocación de vanguardia que caracterizó a la organización durante sus años fundacionales, agitando un discurso que promovía la autodefensa obrera y la dignidad popular. Lejos de ser simples grupos de choque o elementos decorativos, las milicias respondían a la necesidad cotidiana de repeler la violencia política de los grupos contrarios, formando parte de una estrategia más amplia que buscaba articular las bases sociales con la manifestación reivindicativa detrás del proyecto anti-oligárquico, anticapitalista y antiimperialista que caracterizó los afanes revolucionarios del Partido durante este periodo. Por todo esto, las milicias fueron la mejor expresión del ánimo que caracterizó los años fundacionales, dando cuenta de una vocación de avanzada, carácter de masas y un ánimo anti-status quo detrás de una práctica organizativa novedosa, que promovía valores como la disciplina interna y el carácter jerárquico de sus mandos y liderazgos.



# III. DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA A LA POLÍTICA SOCIALISTA: EL FRENTE POPULAR

Durante sus primeros años el PS experimentó una expansión electoral significativa, que le permitió consolidarse como una fuerza política nacional en un período sorpresivamente corto. Durante las elecciones municipales de 1935 logró una importante votación en ciudades industriales y sectores urbanos populares, mientras que en las parlamentarias de 1937 logró elegir 19 diputados y 3 senadores, consolidando un ascenso que lo posicionó como la tercera fuerza de importancia en el parlamento. Los resultados también demostraban que el joven Partido era mucho más que una tienda Grovista o una organización formada al alero de una oportunidad política especifica, mostrando una destacada capacidad de penetración y movilización electoral. Más importante aún, los resultados posicionaron al PS como una alternativa de peso frente a los partidos tradicionales y el Partido Comunista en la representación política de los sectores populares. Los positivos resultados electorales, no obstante, estuvieron acompañados por el mismo discurso revolucionario y de vanguardia que caracterizó a la organización durante sus primeros días. La situación a la larga terminó por configurar una posición contradictoria que, por una parte, rechazaba la legitimidad de la democracia política en favor de medidas y formas de movilización revolucionarias y, por otra, comenzaba a limitar la convocatoria popular exclusivamente a las campañas electorales.

En 1934, el PS llamó a la formación del Block parlamentario de izquierdas con el objetivo de aunar los esfuerzos de los partidos izquierdistas en el parlamento, convocando a los comunistas disidentes -ahora organizados en la Izquierda Comunista-, el Partido Radical Socialista y el Partido Democrático para organizar la oposición al Gobierno de Alessandri y resistir su viraje autoritario. El Block no pretendía ser una coalición electoral formal, sino una coordinación política basada en principios comunes como defender las libertades públicas y sentar las bases para una acción unitaria contra la oligarquía nacional y el imperialismo internacional. La participación del PS en el bloque pretendía proyectar su estrategia a nuevos sectores y crecer en

el campo parlamentario, acumulando fuerza y ganando visibilidad a través de la unidad de acción. Sin embargo, la acción común con partidos burgueses y tradicionales no tocó la identidad de vanguardia ni los principios revolucionarios. En este contexto, el ingreso a la arena parlamentaria y el principio de la transacción política trajo consigo nuevos dilemas: ¿Es posible mantener una orientación revolucionaria desde el municipio y el parlamento? ¿Hasta qué punto era coincidente una política socialista con las alianzas tácticas con partidos burgueses?

Estas preguntas resultaron polémicas para la vida interna y estuvieron en el centro de sucesivas desavenencias sobre el alcance de la movilización electoral, los límites de las alianzas político-parlamentarias y la pertinencia de la política institucional como espacio de transformaciones revolucionarias. En 1935, el Partido Comunista, siguiendo las nuevas directrices de la III Internacional, contribuyó a agudizar estas tensiones lanzando la consigna de unidad antifascista bajo una combinación de "Frente Popular". El plan consistía en la formación de un bloque político, parlamentario y electoral compuesto por las fuerzas obreras y los partidos progresistas, instalando en el horizonte una eventual alianza con el "burgués" y "oligárquico" Partido Radical. El tema fue apasionadamente tratado durante el III Congreso General del PS, donde rechazaron la moción por considerar que el PR era una organización "demo-burguesa", representante de las clases medias y terratenientes, dirigido por una mayoría conservadora interesada en mantener el orden capitalista y salvar su propia existencia como Partido a costa de las fuerzas populares. Por otro lado, criticaron abiertamente el origen extranjero de la consigna, originada en Moscú y alineada con la Internacional Comunista. En definitiva, la consigna fue rechazada aduciendo su carácter confusionista, extranjero y por considerar que en una alianza con fines exclusivamente demo-burgueses no había espacio para la aplicación del programa socialista. La negativa le valió al Partido las críticas del PC, quienes a partir de entonces iniciaron una campaña acusando a la dirigencia socialista de ser anti-unitaria, trotskista y divisionista.

Desde el PS la propuesta fue la ampliación del Block con el fin de sumar a la mayor cantidad de fuerzas afines para oponerse al fascismo, la represión del gobierno y avanzar hacia la creación de una central única de trabajadores que remplazase a la FOCh controlada por los comunistas. Pese a las críticas, la política de unidad rindió sus frutos con el ingreso de la Izquierda Comunista a las filas del PS, aceptada por la directiva en medio de una dura oposición por la orientación "trotskista" de sus militantes. La inserción del PS a las lógicas parlamentarias y el inicio de una práctica orientada a las negociaciones político-electorales generó un debate casi permanente entre las filas del partido, donde convivían posiciones enfrentadas. Por un lado, estaban los que apelaban a los años fundacionales para defender la vigencia de los objetivos revolucionarios y las formas de movilización de vanguardia, por otro, quienes proponían una estrategia de transición al socialismo basada en la acumulación de fuerzas dentro de la institucionalidad representativa. A pesar de estas diferencias, el PS logró mantener una identidad unitaria y un discurso que siguió apelando a la "revolución democrática de los trabajadores manuales e intelectuales" como finalidad política del Partido.

El PS finalmente aceptó la estrategia del Frente Popular empujado por una combinación de factores nacionales e internacionales. En lo nacional, la alianza pretendía frenar el avance de los sectores conservadores y constituir una corriente opositora frente a la política represiva del gobierno. De esta forma, se pretendía proyectar la positiva experiencia del Block -y el protagonismo socialista en el mismo- en una combinación más amplía y mayoritaria. En lo internacional, el avance del fascismo en Europa y el estallido de la guerra civil española sirvieron como una verdadera advertencia, destacando la importancia que comenzaban a asumir las alianzas pluriclasistas en la contención de la amenaza fascista. De esta manera el Partido aceptaba colaborar en principio con fuerzas demo-burguesas y centristas como el Partido Radi-

cal. No obstante, la unidad política *no significaba la unidad ideológica ni la moderación de los objetivos revolucionarios*, por lo que el frentepopulismo fue presentada a la militancia socialista como una estrategia más bien **defensiva**, orientada a **acumular fuerzas en las instituciones representativas** y, eventualmente, **asumir roles en el aparato estatal**.

La alianza frentepopulista dio un sentido completamente nuevo a la inserción electoral del PS, que en 1938 enfrentaba una nueva elección presidencial ahora como miembro de una coalición política amplia que incluía al antiguo adversario radical. La estrategia de contención antifascista tenía por objeto mantener el vilipendiado régimen democrático y sus libertades públicas, pero parecía dejar las realizaciones propias del socialismo en un segundo plano. Con la intención de contrarrestar la influencia radical, afirmar su autonomía y promover un programa de reformas estructurales, el socialismo nominó como pre-candidato de la coalición a Marmaduke Grove Vallejos. Los radicales, por su parte, presentaron a Pedro Aguirre Cerda apelando a su mayoría electoral y su experiencia en el Gobierno para reclamar su derecho a nominar al candidato único frentista. La designación del quedó en manos de una convención presidencial que tuvo múltiples problemas para elegir a un representante. Tras varias rondas de votación sin lograr una resolución, los socialistas comprendieron que un grupo de radicales jamás apoyaría una candidatura que estimaban "extremista" y que no podían contar con los votos comunistas. Finalmente, Aguirre Cerda pudo ser proclamado solo después de que Grove desistiera de su candidatura para salvar la unidad del frente. El gesto del caudillo no pasaría desapercibido por sus aliados, quienes pese a resistirlo como candidato presidencial lo proclamaron presidente del Frente Popular y encargado nacional de la campaña.

La victoria del Frente Popular en las elecciones presidenciales de 1938 significó la entrada del PS a las labores ministeriales, fundando una contradicción entre el discurso revolucionario de inspiración marxista y la vocación

defensiva, moderada y reformista que los radicales buscaron imprimir al Gobierno. Pese a que los lideres del Partido se cansaron de declarar que el Gobierno frentista no contemplaba la realización de medidas socialistas, no tardó en configurarse una tendencia que criticó la actitud burguesa del ejecutivo, su falta de realizaciones en beneficio de los trabajadores y su tendencia a negociar con la derecha. La crítica alcanzó a los jefes del Partido, quienes fueron acusados de desviaciones "socialdemócratas", burocratismo y de subordinar los objetivos revolucionarios a la voluntad radical con la única finalidad de mantener sus posiciones en el aparato administrativo. La tendencia fue liderada por el diputado César Godoy Urrutia y secundada por un sector "revolucionario" de la Federación de la Juventud Socialista, representada por su Secretario General, Orlando Millas. El diputado caracterizó al grupo por su disconformidad con la marcha del gobierno y con la falta de iniciativa de la directiva, a quienes acusó de haber claudicado en sus intentos de dar dinamismo socialista a la coalición. El "inconformismo" acusó la burocratización y el "cretinismo parlamentario" que parecía aquejar al Comité Central, no obstante, también realizó una dura crítica contra lo que estimaban un abandono de los principios revolucionarios y antiimperialistas que habían dado origen al Partido.

La tendencia intentó hacerse con el control del Comité Central durante el VI Congreso de 1939, presentando una línea de "recuperación socialista" que pretendía devolver al PS su vocación clasista y de vanguardia. Tras haber sido derrotados en una dramática votación el grupo, conformado en su mayoría por antiguos miembros de la Izquierda Comunista y liderado por Godoy y otros cuatro diputados, se escindió para dar origen al Partido Socialista de Trabajadores en medio de una serie de enfrentamientos que terminaron con el dirigente inconformista Pablo López asesinado a tiros por milicianos que intentaban tomar un local partidario. El PST no tenía por intención dividir a las huestes socialistas, sino representar una tendencia de recuperación que devolviera al socialismo sus principios revolucionarios

originales, planteando reemplazar al Frente Popular con la formación de un **Frente de Trabajadores** formado exclusivamente por **partidos populares.** Pese al animo **autonomista** que caracterizó al inconformismo en sus días iniciales el PST existió como partido autónomo hasta 1944, fecha en que decidió -no sin luchas intestinas- *ingresar al Partido Comunista*.

El PS finalmente abandonó el Frente por desavenencias con el Partido Comunista los primeros meses de 1941. Desde la firma del pacto nazi-soviético en 1939 los socialistas denunciaron con encono que el PC no tenía empachos en cambiar radicalmente su política para alinearla con la política internacional de guerra promovida por la Unión Soviética. Si bien siguieron compartiendo labores en el frente, la situación entre los partidos obreros sufrió nuevas y más agudas tensiones que incluyeron duros ataques de uno y otro lado. En 1940, el ministro de fomento Óscar Schnake fue designado por el Gobierno para participar de la conferencia de La Habana, instancia que decidió una política de defensa común para los países interamericanos en medio de la II Guerra Mundial. Durante su visita el ministro negoció una serie de acuerdos económicos con el Gobierno norteamericano, los que le valieron ser tildado de pro-imperialista por parte del PC. En un largo discurso, Schnake se defendió de las acusaciones señalando que los partidos comunistas de todo el mundo estaban actuando como verdaderas filiales de la URSS. La caracterización se hizo extensiva a los comunistas chilenos, a quienes acusó de ser un partido antinacional, pro-fascista y lanzado en una campaña solapada para terminar con el Frente Popular siguiendo las órdenes emanadas desde la III Internacional. Pese a abandonar el Frente Popular, el PS siguió en el Gobierno y apeló a la experiencia del Block para formar una nueva coalición izquierdista con exclusión del PC. Sin embargo, intereses encontrados con el Partido Radical, el rechazo de los partidos frentistas a la exclusión del PC y un nuevo viraje independentista en la línea política del Comité Central terminaron con el PS aislado y compitiendo en una lista propia durante las elecciones parlamentarias de 1941.

La experiencia del Frente Popular fue el momento de la institucionalización socialista, quienes intentaron sin éxito conjugar los fines electorales y reformistas con el discurso movilizador y revolucionario. Después de la salida de los inconformistas la moderación y la transacción parlamentaria prácticamente no encontraron oposición, llevando al Partido desde las posiciones socialistas revolucionarias hacia una política más cercana al reformismo o la socialdemocracia, lo que no significó la desaparición completa del discurso de masas. Sin embargo, el acceso a puestos administrativos y recursos públicos cambió de manera notable las estrategias de movilización impulsadas por los socialistas, quienes durante el Gobierno se acostumbraron a la política clientelista y se valieron de las prebendas administrativas para ganar elecciones y apoyos populares. Las directivas, apoyadas por un nuevo contingente de militantes ingresado por obra y gracia de los puestos en la administración pública, siguieron justificando su presencia en el ministerio como "prenda de garantía" para el cumplimiento del programa y asegurar realizaciones en favor de las clases populares.

El final de la coalición frentepopulista no terminó con los gobiernos de coalición ni con la participación socialista en el ejecutivo. Durante los años siguientes el PS continuó participando de coaliciones con comunistas y radicales. La colaboración, tal y como sucedió durante el Gobierno de Aguirre Cerda, siguió siendo el eje de distintos debates y polémicas internas, las que derivaron en nuevas y más agudas divisiones que llevaron al Partido a perder buena parte de su fuerza electoral e influencia social en medio de discusiones sobre el papel del socialismo y la movilización de masas en gobiernos pluriclasistas de hegemonía radical. En síntesis, durante los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, los socialistas vivieron nuevas y más profundas discusiones que dividieron al partido entre un sector colaboracionista -liderado por Grove, Schnake e Ibáñez- y un grupo independentista -con figuras como Salvador Allende y Raúl Ampuero-.



STATES STATES

Bloggerian (1965) (1965) (1966

Bereiten de Linke diebe geschieben en Konede merkebbeke bestellt

An experience of the experience of the control of the experience o



## IV. LAS LUCHAS INTESTINAS: LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN

Con la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, en noviembre de 1941, el izquierdismo volvió a enfrentar el problema de la unidad con miras a formar un nuevo Gobierno de coalición. El Partido Radical fue el más interesado en sumar los apoyos de las mismas fuerzas que en 1938 le habían dado el triunfo al Frente Popular, llamando al conjunto de partidos democráticos a apoyar la nominación de Juan Antonio Ríos. La candidatura amplió las bases que habían compuesto al frente, recibiendo los apoyos del Partido Agrario y la Falange Nacional, quienes apoyaron al candidato radical con la condición de dejar fuera del pacto a los comunistas. Por su parte, los socialistas proyectaron la política independiente que los llevo a competir solos en la parlamentaria de 1941, nominando al ex ministro de fomento Óscar Schnake como candidato a la presidencia. Si bien la proclamación de Schnake fue aprobada por mayoría, la Federación de la Juventud Socialista rechazó la proposición argumentando que la finalidad de la candidatura no era otra que negociar, una vez más, la presencia del Partido en un gabinete de coalición. Finalmente, Ríos logró conseguir el apoyo del PS y sumar al PC, quienes apoyaron la candidatura radical con la finalidad de evitar el regreso del exdictador Carlos Ibáñez al poder, candidato de la derecha.

Una vez electo como presidente, Ríos llamó a los socialistas a formar un nuevo gabinete junto a radicales y liberales. Por su composición el nuevo ministerio resultaba mucho más centrista y moderado que los de su predecesor, desatando nuevas incidencias internas sobre los objetivos de la presencia socialista en el gobierno. La nueva coalición de "Alianza Democrática" pretendía ser la continuadora del Frente Popular, no obstante, la presencia liberal, la preponderancia radical y el personalismo del nuevo presidente dejaron las medidas progresistas y revolucionarias en un segundo plano. En este contexto, colaboracionistas e independentistas se enfrentaron con encono durante el VIII Congreso de 1942, donde los representantes de la FJS liderados por Raúl Ampuero y las seccionales de Santiago representadas por Julio César Jobet intentaron sin éxito retirar al Partido de las labores ministeria-

les. Según los opositores a la línea de colaboración sostenida por el Comité Central, el PS estaba siendo utilizado como sostén de un gobierno con tendencias reaccionarias con el beneplácito de la directiva, quienes insistían en la colaboración con el único fin de no perder sus prebendas e influencia en el aparato administrativo.

Los opositores a la línea de colaboración lograron hacerse con el control del Partido durante el IX Congreso de 1943, aprobando una línea de independencia respecto del gobierno que retiró a los ministros socialistas del gabinete pero que mantuvo al Partido en la AD. El grupo de derrotados, liderados por Marmaduke Grove, abandonaron el Congreso y decidieron escindirse del Partido desconociendo los métodos por los que se habían tomado las nuevas resoluciones. Si bien en el centro de la nueva escisión se encontraba la política de colaboración, Grove justificó el quiebre arguyendo una serie de reglas internas y estatutos que lo posicionaban como "jefe máximo del socialismo chileno" y le otorgaban, a su juicio, voz, voto y veto sobre las decisiones de los organismos internos. El impasse sólo pudo ser superado con la elección de una directiva colegiada, la que dividió los cargos del Comité Central y los distintos Comités Regionales entre los miembros de la facción grovista y el Comité Central electo durante el IX Congreso. Pese a que el pacto de unificación mantenía la independencia y se reservaba el derecho a criticar al Gobierno, los grupos grovistas insistieron en su derecho a participar de labores en el ejecutivo, manteniendo una relación no oficial con el radicalismo que terminó por desnaturalizar la política de independencia. Finalmente, durante la celebración del X Congreso en 1944 la fracción grovista abandonó el Partido definitivamente, celebrando un Congreso paralelo que terminó con la fundación del Partido Socialista Auténtico y con la adhesión formal de Grove al Gobierno, el gabinete y la Alianza Democrática.

La cuestión de la colaboración fue el asunto eje de la discusión durante este período, registrándose un crecimiento de las posiciones opositoras y que reclamaban terminar con la presencia socialista en el gabinete, alimentadas por la persistencia en la colaboración y el ejercicio autoritario de los liderazgos. Las críticas se centraron en la falta de reformas estructurales y en el riesgo de transformar al PS en un organismo burocratizado y exclusivamente orientado a la administración en desmedro de las perspectivas de transformación social. Las posiciones más ortodoxas denunciaron que los ministros socialistas estaban alineados con el radicalismo y no estaban cumpliendo con el programa del Partido, lo que fue visto por muchos como una subordinación y un abandono de principios inaceptable. Más importante aún, la experiencia de los gobiernos de coalición contribuyo significativamente a endurecer las críticas hacia la política de conciliación de clases, demostrando que era imposible lograr realizaciones en favor de las clases populares y la aplicación de programas socialistas en alianza con partidos que, por su composición y extracción social burguesa, resultaban enemigos naturales de este tipo de medidas.

El resultado de años de polémicas y divisiones en torno a la colaboración se reflejó en un marcado retroceso en el campo de las elecciones. La otrora tercera fuerza electoral del país registró una importante disminución de sus votos durante las municipales de 1944. Sin embargo, la expresión más crítica del desfonde fueron los pobres resultados obtenidos por el Partido oficial durante las elecciones parlamentarias del año siguiente, donde el PS perdió poco más de 40.000 votos respecto de las elecciones de 1941. En este contexto, el socialismo inicio un proceso de recuperación interna y elaboró nuevas definiciones, basadas en un examen crítico de las experiencias de colaboración. La colectividad sancionó una nueva política denominada "Frente del Pueblo", la cual recogía las experiencias del Frente Popular y la Alianza Democrática, notando su falta de realizaciones en beneficio de las clases populares y sus desastrosas consecuencias al interior del Partido.

Después de años concurriendo a pactos electorales y de participar en gabi-

netes contrarios a los principios socialistas, el Partido dio un nuevo sentido a las acciones unitarias. A partir de ahora los pactos debían superar el electoralismo para basarse en la unidad de principios político-ideológicos. Lo anterior implicaba tomar distancias del Partido Radical y de las consignas extranjeras agitadas por el Partido Comunista. De esta forma, el PS pretendía retomar los principios socialista-revolucionarios y proyectar una política de izquierda verdadera y sin oportunismos. Pese a las distintas declaraciones a favor de la nueva política, en 1946 un nuevo llamado radical a formar parte del ministerio ante la enfermedad del presidente Ríos terminó por desvirtuar completamente la política de no colaboración. Lejos de la independencia y la unidad ideológica, el PS volvió a las labores ministeriales junto con liberales y militares, en una combinación de emergencia convocada por el vicepresidente Alfredo Duhalde.

Tras la muerte del presidente Ríos en junio de 1946 y con una nueva elección presidencial en el horizonte el PS fue objeto de distintos llamados a formar coaliciones electorales. Su zigzagueante posición frente a los gobiernos de coalición provocó que liberales, conservadores y radicales enviaran comunicaciones oficiales pidiendo los apoyos del Partido para sus respectivas candidaturas. Finalmente, decidieron retornar a la línea de independencia, nominando como candidato a Bernardo Ibáñez, Secretario General desde 1944, diputado y dirigente de la Central de Trabajadores de Chile desde su creación en 1939. La nueva aventura presidencial logró subsistir pese a las presiones del radicalismo y el PC para sumar al PS a su candidatura, no obstante, el candidato del socialismo llego ultimo logrando poco más del 2% de los votos a nivel nacional, mostrando una vez más las dimensiones críticas del retroceso electoral.

Gabriel González, presidente electo, extendió una nueva invitación para que los socialistas formaran parte del gabinete mediante una carta enviada al XI Congreso del Partido, sin embargo, y en consecuencia con la línea de inde-

pendencia, el PS solo ofreció sus votos para la ratificación del candidato ante el Congreso Pleno y se restó de las labores ministeriales. La instancia también criticó duramente la Dirección de Bernardo Ibáñez y su decisión de colaborar con el gobierno provisional de Duhalde, achacando buena parte del desastroso resultado electoral al entreguismo y desnaturalización de la línea de independencia. Raúl Ampuero, nuevo Secretario General, se sumó a las críticas y revivió la línea de recuperación convocando a una conferencia programática y teórica que debía, además de definir un nuevo programa, dar un sustento teórico a una nueva orientación socialista-revolucionaria y discutir una línea política capaz de responder al orden global y los nuevos problemas económico-sociales surgidos después de la II Guerra Mundial. Con la elección de Raúl Ampuero como Secretario General ingresó a la Dirección del Partido una nueva generación, formada en los años de posguerra y crítica desde sus días en la FJS de la política colaboracionista y el abandono de principios.

El Gobierno de González marcó el ingreso de Chile a las lógicas de la guerra fría global, haciendo del anticomunismo una política oficial del Gobierno. Si bien el presidente radical logró llegar al poder con el apoyo de los comunistas, hacia 1947 la cuestión de la defensa de la democracia asumió un tono distinto, ya no relacionado con la amenaza totalitaria del fascismo sino con el peligro extracontinental del comunismo. En Chile, la cuestión del anticomunismo se valió de distintas huelgas en la región del carbón para acusar las tendencias antidemocráticas y hasta subversivas que asumía la acción comunista en el país. Las críticas y sospechas hacia el PC fueron transversales, alcanzando a una parte de la militancia socialista que se declaró abiertamente anticomunista. Las relaciones entre los partidos obreros volvían a tensionarse en medio de enfrentamientos callejeros y una nueva división del mundo sindical que terminó con la CTCh, antiguo símbolo unitario de las clases populares, dividida entre una facción comunista y una socialista.

La conferencia programática de 1947 dio cuenta del contexto, pero también, de las distintas crisis internas que habían afectado al PS durante sus años de colaboración. De hecho, uno de sus mandatos fundamentales era la definición de una política clara y precisa, basada tanto en saberes técnicos como en una profunda reflexión ideológica, para poner punto final a la falta de una orientación unitaria y comúnmente aceptada. El documento final, redactado por Eugenio González Rojas, fue también un intento por poner fin a la dualidad de principios y definir una identidad ideológica clara para la colectividad. En lo teórico, rescató la antigua crítica al comunismo ahora actualizada por la experiencia del expansionismo soviético que siguió a la II Guerra Mundial. El PS se declaraba marxista, pero humanista y democrático, desmarcándose de cuestiones como la dictadura proletaria y rechazando el imperialismo en sus versiones comunistas y capitalistas, dando continuidad a la tradición de un socialismo revolucionario nacional y autónomo de las grandes corrientes políticas globales. El documento también realizó un nuevo diagnóstico sobre el comportamiento de las clases sociales en Chile, destacando la incapacidad de los sectores burgueses y terratenientes para impulsar cualquier medida orientada a la modernización del estado y la transformación del régimen capitalista, del cual dependían para mantener sus posiciones dominantes. El nuevo diagnóstico también insistía en el sentido democrático del socialismo, el cual poco tenía que ver con la mantención de las instituciones y prácticas parlamentarias de la democracia burguesa, sino con la fundación de un horizonte de emancipación que tomaba forma en la idealidad de la "República Democrática de Trabajadores Manuales e Intelectuales".

Si bien no hubo una oposición organizada contra las nuevas definiciones, el PS siguió evidenciando una vida interna marcada por el conflicto entre colaboracionistas e independentistas. Las tendencias asumieron el lenguaje propio de la guerra fría para evidenciar una división que, según la prensa oficialista de la época, mostraba al partido separado entre socialistas **pro y** 

anticomunistas. Esta nueva dimensión discursiva se volvió más evidente en la medida que el Gobierno y las distintas fuerzas políticas comenzaron a proponer la ilegalización del otrora partido oficialista con la presentación al congreso de la ley de defensa de la democracia -también conocida como ley maldita- en 1948. La votación en el parlamento volvió a dividir las aguas del socialismo cuando los diputados Ramiro Sepúlveda y Luis González junto con el senador Eliodoro Domínguez decidieron apoyar la iniciativa, desconociendo el rechazo que había expresado el PS frente al proyecto.

Los parlamentarios fueron sancionados con la expulsión, seguidos por Bernardo Ibáñez y otros dirigentes favorables a la proscripción comunista y la colaboración ministerial, quienes se organizaron en un partido distinto para sumarse al gabinete de González. La división se hizo oficial cuando el tribunal electoral, siguiendo las órdenes del ejecutivo, reconoció a este grupo con el nombre de Partido Socialista de Chile durante la inscripción de candidaturas para las elecciones parlamentarias de 1949. El grupo dirigido por Ampuero, que se quedó con la mayoría de la militancia y representación parlamentaria, asumió el nombre de Partido Socialista Popular. Así, el socialismo enfrentó las elecciones dividido en tres organizaciones diferentes, con liderazgos particulares y principios políticos que, si bien reconocían la trayectoria y experiencia del partido fundado en 1933, evidenciaban una clara división entre el grovismo, el colaboracionismo anticomunista y las tendencias marxista-revolucionarias. Las diferencias quedaron totalmente claras ese mismo año, cuando un comité de unidad formado por Astolfo Tapia (PSP), Eleodoro Domínguez (PSCh) y Marmaduke Grove (PSA) intentó sin éxito superar las diferencias. La condición de la unidad fue dada por el PSP y el PSA, quienes exigieron al PSCh abandonar el Gobierno de manera inmediata. Estos últimos, por su parte, se negaron a dejar sus puestos en la administración y solicitaron abandonar las definiciones teóricas y programáticas de 1947, suscribiendo exclusivamente a sus orientaciones internacionales.

Una última escisión afectó al partido en el contexto de la definición de candidaturas para la elección presidencial de 1952. En 1951, el senador Carlos Ibáñez presentó su postulación a la presidencia con un discurso anti-oligárquico, reformista y nacionalista que buscó el apoyo de las izquierdas ofreciendo poner fin a la ley de defensa permanente de la democracia. El llamado fue contestado por el PSP después de que el candidato aceptase un programa denominado "Plan de lucha contra la crisis y la miseria", desatando las críticas del PSCh y de un grupo de militantes al interior del PSP quienes vieron en la postulación del general el retorno del autoritarismo y la dictadura que encabezó hasta 1931. El quiebre se hizo evidente tras un viaje del socialista popular Astolfo Tapia a la Argentina, donde vio de primera mano las tendencias autoritarias y la persecución desatada sobre el movimiento socialista bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Retornado al país denunció que la candidatura de Ibáñez representaba tendencias análogas, lo que le valió su expulsión del partido. Tapia fue secundado por un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba Salvador Allende, quienes avalaron sus dichos y abandonaron el PSP para sumarse al PSCh. La entrada de marxistas y pro-comunistas al partido que apoyó la legislación represiva no pasó desapercibida, generando que los socialistas de Chile pasasen formalmente a la oposición y la salida de un grupo de dirigentes liderados por Bernardo Ibáñez, quienes decidieron seguir colaborando con el Gobierno anticomunista de González desde un partido socialista distinto.

El PSP defendió la postulación de Ibáñez insistiendo en que su candidatura respondía al descontento generalizado con la situación económica y la ineficiencia administrativa, representando un anhelo popular mayoritariamente anti-oligárquico, reformista y hasta antipolítico que trascendía las distinciones entre izquierdas y derechas. Según socialistas populares como Óscar Waiss y Aniceto Rodríguez, la "marea popular ibañista" encarnaba un ánimo rebelde y renovador que de ser encausado podía transformarse en revolución socialista. Por otro lado, los socialistas de Chile decidieron lanzar la candida-

tura de Salvador Allende, incluyendo a los proscritos comunistas y llamando al conjunto de fuerzas progresistas -incluyendo a falangistas, demócratas y sectores radicales que después de un corto período de negociación decidieron no apoyar al candidato socialista- para organizar un "Frente Nacional del Pueblo" detrás de un programa que pretendía restaurar las libertades públicas y empujar medidas orientadas al cumplimiento de las fases "democrática-burguesas" de la revolución. La postulación de Allende buscó articular un nuevo bloque popular izquierdista detrás de un programa de reformas estructurales que pretendían generar las condiciones democráticas necesarias para avanzar hacia medidas socialistas, lo que resultaba del todo coincidente con el afán reformista y progresista de organizaciones típicamente anticomunistas como la Falange y el Partido Radical.

Carlos Ibáñez del Campo fue electo presidente por una mayoría aplastante de votos que parecían confirmar el ánimo de crítica y descontento generalizado hacia las organizaciones políticas tradicionales después de años de gobiernos de coalición. Salvador Allende, por su parte, salió último con poco más del 5% de los sufragios. Más allá de los resultados específicos, las elecciones de 1952 perfilaron las dos tendencias que más adelante volverían a bregar por la conducción del socialismo unificado y del Frente de Acción Popular.



## V. EL LARGO CAMINO DE LA UNIDAD: LA ESTRATEGIA DEL FRENTE DE TRABAJADORES, EL FRENTE DE ACCIÓN POPULAR Y LA UNIDAD SOCIALISTA

Los socialistas populares ingresaron al Gobierno y a las labores ministeriales con una actitud que distaba mucho de la colaboración registrada durante la época de los gobiernos radicales. Con la experiencia del Frente Popular y la Alianza Democrática en la mira, los ministros, funcionarios y parlamentarios del PSP asumieron una línea de acción que pretendía utilizar los espacios en el ejecutivo y el poder legislativo para dinamizar la acción del Gobierno y avanzar hacia medidas de corte socialista. Inicialmente la estrategia resultó exitosa, permitiéndole al PSP transformarse en la segunda fuerza oficialista en el Congreso durante las elecciones de 1953, sin embargo, y como era de esperar, la estrategia pronto resultó conflictiva para la convivencia interna de una coalición heterogénea que incluía a Agrario Laboristas, demócratas del "pueblo", radicales "doctrinarios", un personalista Movimiento Nacional Ibañista -MNI- y el Partido Femenino de Chile -que le aseguró al general la votación mayoritaria de las mujeres, quienes por primera vez participaban de las elecciones presidenciales-. La fuerza parlamentaria ibañista, aunque importante, no constituyó una mayoría capaz de evitar los conflictos entre los poderes ejecutivos y legislativos, contribuyendo al estancamiento de las reformas y obligando a la transacción con la oposición en el Congreso. Así distribuidas las fuerzas, la situación terminó por minar la pobre cohesión de las fuerzas gobernistas en el ejecutivo y el parlamento.

Desde el ministerio del trabajo Clodomiro Almeyda promovió una campaña de sindicalización y unidad obrera que terminó con la disputa socialista-comunista en el campo sindical, promoviendo también distintas manifestaciones para presionar la realización del programa de gobierno desde la protesta. Como sucedió durante las anteriores experiencias de colaboración, el PSP pronto vio frustradas sus intenciones en el ejecutivo, acusando al presidente de no cumplir con el programa ofrecido a la opinión pública, continuar con la represión sobre las organizaciones obreras y negociar las transformaciones con las fuerzas reaccionarias y partidos tradicionales atrincherados en el Congreso. La falta de realizaciones redundó en nuevos

desencuentros internos, apareciendo un sector de militantes que comenzaron a exigir el fin de una colaboración que, desde un principio, había estado condicionada al cumplimiento de un programa con reformas específicas. Por otro, estaban quienes pretendían agudizar las contradicciones de clase utilizando sus posiciones en el gobierno para dar "dinamismo" a su administración. Finalmente, durante el XV Congreso de 1953, el PSP puso punto final a su colaboración con el gobierno. Pese a abandonar las labores en el ejecutivo, el Partido manifestó su intención de mezclar inserción institucional con movilización social para transformar, ahora desde la oposición parlamentaria y el mundo obrero organizado, la "intransigencia popular" que permitió la elección de Ibáñez en un movimiento de avanzada "nacional y popular".

Con el PSP de regreso en la vereda de la oposición se reabrió la posibilidad de unificar a los sectores y partidos de izquierda. Una primera gestión llegó desde la directiva comunista al seno mismo del XV Congreso, convocando al PSP a la unidad de los sectores "democráticos, antiimperialistas y anti-feudales" que incluía, además de los socialistas de Chile, eventuales acuerdos con radicales, falangistas y demócratas. La propuesta fue rechazada por Aniceto Rodríguez, Secretario General, quien acusó la formula de confucionista y como una continuación de la política de alianzas que había llevado al movimiento popular a claudicar durante los gobiernos de coalición. Rodríguez no negó la posibilidad de establecer acuerdos transitorios para empujar medidas concretas desde el parlamento y el mundo sindical, sin embargo, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de unidad con los "traidores" del PSCh y de colaborar en alianzas permanentes con aquellos partidos que, como radicales y falangistas, representaban a grupos sociales burgueses, terratenientes y antagónicos a los intereses de la clase obrera.

Con esta actitud el PSP buscó **retomar la tesis de independencia**, agregándole una **marcada posición clasista** que pretendió agrupar a aquellos partidos genuinamente **"populares"** y alineados con los **intereses de los trabajadores**  rechazando cualquier compromiso que, como el Frente Popular, la Alianza Democrática y la reciente experiencia ibañista, significase reeditar fórmulas de conciliación entre clases. La orientación clasista se transformaría en línea política durante el XVI Congreso de 1955, cuando el PSP sostuvo una nueva fórmula de unidad limitada a los partidos obreros y la Central Única de Trabajadores, bajo el nombre de "Frente de Trabajadores". La nueva línea buscaba distanciarse claramente de la política sostenida por el PC y el PSCh, quienes detrás de la estrategia del "Frente de Liberación Nacional" pretendían, como en 1952, la unidad de los sectores democráticos y progresistas dentro y fuera de la izquierda.

El Frente de Trabajadores condensó toda una reflexión crítica sobre la experiencia durante los gobiernos de coalición radical y los programas progresistas de conciliación de clases, marcando un verdadero salto cualitativo respecto de la política de alianzas, las formas de movilización y los fines programáticos del socialismo. Además de proponer una unidad limitada a los partidos populares y el mundo sindical, el nuevo frente implicaba, según sus defensores, "endurecer la lucha", hacerla "más definitiva" y en torno a objetivos "más revolucionarios". Más que una fórmula electoral, la política pretendía transformarse en una estrategia de movilización social capaz de superar los formalismos "demo burgueses" y crear las condiciones para la realización de las reformas revolucionarias que permitiesen la instalación definitiva de la "República Democrática de Trabajadores".

En 1956, el Partido Comunista realizó un nuevo llamado a la unidad de las desperdigadas fuerzas de izquierda. El nuevo llamado, como en ocasiones anteriores, mezcló factores nacionales e internacionales. En lo nacional, sobresalía la necesidad de restablecer plenamente las libertades públicas terminando con la aún vigente ley maldita y unificar a los sectores de izquierda aun fraccionados después de la experiencia ibañista. En lo internacional, el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética realizó una dura crítica a la ex-

periencia y táctica del stalinismo, otorgando mayor independencia a los partidos comunistas del mundo para realizar alianzas con fuerzas progresistas y hasta participar en gobiernos de coalición democrática de acuerdo a las condiciones de cada país. En Chile, los partidos socialista popular, democrático del pueblo, socialista de Chile y comunista dieron cuenta del nuevo ánimo unitario fundando el Frente de Acción Popular. La alianza tenía la finalidad de coordinar los esfuerzos de los partidos izquierdistas en los campos sindical y electoral, coordinar un acuerdo parlamentario para derogar la ley represiva aún vigente y sellar la unidad de los partidos obreros en una alianza que superase lo meramente político electoral para buscar posiciones comunes en el espacio ideológico.

El PSP recibió positivamente la nueva propuesta y felicitó la nueva actitud del comunismo internacional, no obstante, condicionó la alianza a los partidos ideológicamente afines y de extracción social y orientación política popular. De esta forma, quedaban excluidos de cualquier acuerdo permanente los grupos progresistas y democráticos, sin clausurar la posibilidad de acuerdos transitorios detrás de objetivos específicos en el campo parlamentario. Con la izquierda reunida en una nueva coalición quedaba aún pendiente el tópico de la unidad orgánica de los partidos socialistas, los que despues de las municipales de 1956 -primeras elecciones a las que el FRAP concurrió como un bloque-comenzaron a actuar de hecho como un partido único a través de una directiva colegiada. En las vísperas del congreso de unidad, pactado para el mes de junio de 1957, primaron las declaraciones unitarias y un ánimo de reconciliación política con promesas de uno y otro lado, incluyendo en sus sesiones previas a viejos militantes socialistas como Ramón Sepúlveda Leal y Óscar Schnake. No obstante, las discusiones del torneo mostraron de forma clara los desacuerdos que informarían la convivencia interna una vez reunificado el socialismo.

Durante el congreso se expresaron dos líneas políticas claras, las cuales se

enunciaron en dos posiciones respecto de las candidaturas para las elecciones presidenciales de 1958. Desde la vereda del PSP nombres como Aniceto Rodríguez y Óscar Waiss defendieron el Frente de Trabajadores como una política de autonomía socialista, ubicando al partido "contra la derecha y el centrismo" y bregando por una candidatura con base en los partidos del FRAP. Lo anterior implicaba una caracterización del radicalismo, el falangismo cristiano y el agrario laborismo como fuerzas reaccionarias, cerrando la puerta a cualquier tipo de entendimiento con estos partidos. Por el lado del PSCh nombres como Salvador Allende y Agustín Álvarez defendieron la política de alianzas con sectores democráticos, reconociendo en organizaciones como la Falange Nacional y el Partido Radical tendencias progresistas que podían traducirse en una nueva fórmula de compromiso condicionado a la realización de un programa nítidamente izquierdista y revolucionario. Finalmente el congreso -dominado por una abrumadora mayoría de socialistas populares- aprobó un voto político alineado con las tesis de autonomía que declaró su rechazo a cualquier compromiso con fuerzas centristas, declaró su intención de nominar una candidatura presidencial de los partidos del FRAP y anunció la unidad de las facciones en torno a las orientaciones del Frente de Trabajadores, eliminando de modo explicito cualquier "dualidad ideológica y principista" al interior del partido unificado.

Un tercer grupo lo constituyó la llamada Federación Socialista, integrada principalmente por antiguos miembros de la tendencia anticomunista al interior del PSCh que salieron de la organización debido a su alianza con el PC durante las elecciones de 1952. Con nombres como el exministro Juan Garafulic y Eliodoro Domínguez, defendieron una tesis de autonomía que buscó marcar diferencias irreconciliables entre el socialismo como orientación ideológica con el comunismo. Críticos acérrimos del Frente de Acción Popular y del Frente de Trabajadores, buscaron la unidad por fuera del FRAP constituyendo alianzas de corta duración con el PR y los desperdigados grupos ibañistas despues de que el PSP abandonó el gobierno. A la Federación se

sumó un grupo que se autodenominó como "socialismo marginado" quienes convocaron a un congreso propio, al que pese a las invitaciones extendidas *no asistió ninguna de las facciones dentro del FRAP*. Siguiendo los principios del "socialismo democrático" el congreso señaló que la unidad debía trasuntarse en lo ideológico y no podía limitarse a la simple reunificación de directivas. El socialismo unificado debía revisar los principios fundamentales que habían informado al partido hasta ese momento, exigir la proyección internacional de Chile hacia el mundo libre y condenar explícitamente el comunismo internacional. Por su rechazo a la política de unidad socialista-comunista, su posición favorable a los compromisos con el radicalismo y su alineación internacional con el bloque occidental, no fueron siquiera considerados en las gestiones de unidad lideradas por el PSP y el PSCh.

El Frente de Acción Popular inauguró una nueva etapa para la unidad socialista y los partidos de izquierda, marcada por una orientación de independencia y hasta prescindencia de los partidos progresistas y de centro en la nominación de candidaturas presidenciales. También puso fin a años de amargos desencuentros y conflictos con el Partido Comunista, fundando una unidad a largo plazo y con la perspectiva de alcanzar el Gobierno detrás de un programa compartido. Sin embargo, la alianza mantuvo la independencia ideológica de sus componentes, cuestión que en los hechos se tradujo en la convivencia de la línea clasista del Frente de Trabajadores con la estrategia progresista del Frente de Liberación Nacional, situación que tuvo su propia expresión al interior de las huestes socialistas reunificadas despues de 1957. La dualidad estratégica expresaba la convivencia de diagnósticos y posiciones teóricas independientes, no obstante, su expresión más clara se dio en el campo de las elecciones y los acuerdos parlamentarios. Pensada como una alianza de "largo alcance" que incluía distintos acuerdos ideológicos, su expresión principal fue política, electoral y parlamentaria, cuestión que con el tiempo generó tensiones al interior del PS, acostumbrado a criticar duramente los espacios de la "democracia burguesa" y destacar el rol de la movilización popular en el contexto del Frente de Trabajadores.

Expresión de la dualidad de posiciones que caracterizó la alianza de izquierda fue la candidatura de Salvador Allende durante las elecciones presidenciales de 1958. En principio, la postulación del FRAP se correspondía con la necesidad de levantar una opción política autónoma del radicalismo y otros partidos progresistas, no obstante, desde antes de la nominación, las izquierdas volvieron a recibir llamados para sumarse a la postulación radical. Durante el transcurso de la campaña el Partido Comunista realizó distintos llamados a los independientes y grupos progresistas para sumar sus apoyos a la candidatura frapista, cuestión que fue secundada por el propio Allende, quien en su calidad de candidato buscó el apoyo de las bases radicales -cuyo candidato era Luis Bossay- y del nuevo Partido Demócrata Cristiano -que participaba por primera vez en elecciones con Eduardo Frei-. Pese a que Allende logró un impresionante segundo lugar y estuvo muy cerca de quedarse con la presidencia, en el PC hubo una crítica constante hacia el Frente de Trabajadores, al que consideraban infantil y sectario, llegando a achacar la derrota de Allende a la actitud de autonomía sostenida por las dirigencias socialistas. Desde el PS la evaluación fue completamente distinta, postulando que pese a ser derrotados por el derechista Jorge Alessandri, los buenos resultados se debían justamente a la agitación de un programa nítidamente izquierdista y secundado por fuerzas verdaderamente populares y de avanzada.

En términos generales, este fue el tono de las desavenencias posteriores al interior del FRAP y del mismo PS. Sin embargo, durante la década siguiente el ejemplo de la revolución cubana y la continuidad de una política dedicada exclusivamente a las elecciones y el campo institucional tendieron a dar un nuevo sentido a estos debates. Con el triunfo de la primera revolución socialista de América Latina, los socialistas iniciaron un proceso de reflexión política que abrió nuevos horizontes para la línea estratégica del Frente de Trabajadores. El partido comenzó a debatir abiertamente sobre la pertinencia

de la estrategia electoral en el continente, basados en una evaluación crítica de las experiencias electoralistas que habían caracterizado la acción del partido hasta ese momento y las nuevas perspectivas de movilización política popular que mostraba el ejemplo cubano.



## VI. UNA NUEVA SENDA PARA LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA. LA RADICALIZACIÓN DURANTE LA DÉCADA DE 1960

El antiimperialismo y el latinoamericanismo fueron dos posiciones políticas centrales en la reflexión socialista hasta 1973. Desde su fundación adhirió a una interpretación de la ideología marxista que se distanció explícitamente de los grandes "vaticanos ideológicos" y que pretendió la organización de una Internacional Socialista Americana. De un modo practico, la orientación antiimperialista informó distintas críticas sobre la política comunista, la promoción de medidas como las nacionalizaciones y el desarrollo industrial interno, y también, una preocupación constante por la suerte de distintos movimientos de liberación nacional y lucha por el socialismo registrados en regiones tan disimiles como los Balcanes, África, Asía y América Latina. Estas posiciones asumieron una mayor preponderancia durante la década de 1950, cuando los socialistas populares viraron su atención al conjunto de territorios semicoloniales y en procesos de liberación después de la Segunda Guerra Mundial, tendiendo a encontrar coincidencias entre la realidad económico-social de estos países con el caso chileno. En este contexto, el triunfo de la revolución cubana el primero de enero de 1959 abrió una nueva era para los movimientos de izquierda revolucionaria del conjunto de países "semi coloniales y dependientes". En Chile, el ejemplo de la isla repercutió sobre el debate ideológico y las formulaciones políticas del PS con una intensidad que no se verifico en ningún otro partido o movimiento.

Como primer punto a clarificar es necesario mencionar que la radicalización no comenzó con el desenlace revolución cubana, sino que con la adopción del Frente de Trabajadores y una estrategia de autonomía que, además de condicionar las acciones en el campo electoral parlamentario a cuestiones ideológicas, promovía nuevas formas de organización y movilización popular orientadas a la "dinamización" del proceso político-social chileno. Esta dualidad entre trabajo electoral y movilización social, aunque enunciada de forma constante despues de 1953, no fue desarrollada de un modo sistemático por las dirigencias socialistas, transformándose en una cuestión polémica para la convivencia interna durante los años siguientes.

Otro antecedente de la radicalización se encuentra en la experiencia de los gobiernos de coalición radical, caracterizados despues de 1948 como alianzas orientadas por la conciliación de intereses y grupos sociales irreconciliables, perfilando una orientación de clase que será central en las elaboraciones teóricas y discursivas posteriores. La colaboración también había demostrado los límites de la institucionalidad representativa y la acción electoral para la actividad revolucionaria, reafirmando las tradicionales posiciones críticas de la democracia burguesa y la necesidad de contar con una política de masas que sustentase y fortaleciera la posición del Partido en el campo político-parlamentario. Si bien la movilización social y la organización sindical asumieron un rol más marcado en el contexto del Frente de Trabajadores, también es cierto que las elecciones, el Estado y el trabajo parlamentario siguieron siendo defendidos como una vía para la dinamización del proceso revolucionario mediante la presentación de proyectos de ley y el impulso de reformas. El afán revolucionario jamás significó el abandono de las practicas parlamentarias ni del electoralismo, las que tendieron a profundizarse con los buenos resultados electorales logrados por el FRAP después de 1956. Es más, las alianzas parlamentarias jugaron un papel importante en cuestiones como la derogación de la ley maldita y la reforma del sistema electoral en 1958, iniciativas que fueron presentadas como un logro de la izquierda unida y una prueba de los alcances que podía tener la acción conjunta con sectores democráticos y progresistas.

El discurso clasista y obrerista distaba mucho de la práctica electoral-parlamentaria que caracterizó a PS durante la alianza frapista. Sin embargo, despues de la revolución cubana, aparecieron voces que exigieron clarificar el verdadero rol de la orientación de masas en la política del Partido. Es necesario tener en cuenta que la revolución no solo generó admiración y asombro, asumiendo un lugar referencial para el estudio y comprensión de los fenómenos político-sociales que por entonces sacudían a Latinoamérica y demás regiones del Tercer Mundo. Como referente político, Cuba mostra-

ba las perspectivas de la movilización armada, la organización clandestina y la importancia del trabajo de masas desde la fase organizativa de un movimiento insurreccional hasta el estallido de una guerra de liberación revolucionaria. Como revolución modélica, evidenciaba las lógicas sociales nacionales y juegos de poder internacionales que, a partir de ese momento, caracterizaron a los procesos revolucionarios por la liberación nacional y el socialismo en América Latina. En el campo nacional, la revolución probaba que una vanguardia pequeña pero bien dirigida podía sumar a un grupo mayoritario en acciones de violencia capaces de derrotar a un ejército profesional. Mientras que en el campo internacional, sobre todo despues de la invasión norteamericana de Playa Girón en 1961, evidenciaba que cualquier proceso revolucionario debía ser capaz de defenderse de un ataque directo del imperialismo norteamericano.

Estas cuestiones se trasladaron hacia el debate interno informando las primeras críticas hacia el rol secundario que asumía la movilización del mundo popular en la política del Comité Central. Como en tiempos anteriores, la crítica pretendió rescatar al Partido del electoralismo y la burocratización para ponerlo en línea con la organización de un movimiento de masas que permitiera al PS superar los límites de la institucionalidad democrática. Las críticas se hicieron extensivas a la alianza socialista-comunista, acusando a la directiva de subordinar las orientaciones revolucionarias del socialismo en favor de la estrategia etapista, democrático-burguesa y sistémica del Partido Comunista y su Frente de Liberación Nacional. En medio de este conflictivo contexto, el FRAP lanzó una vez más el nombre de Salvador Allende para competir en la elección presidencial del año 1964.

Desde 1961, el Comité Central realizó distintos procesos disciplinarios que terminaron con la expulsión de dirigentes históricos como Óscar Waiss y otros militantes acusados de **fomentar la indisciplina interna** con la intención de fundar un **tercer Partido Obrero a costa del FRAP**. Durante el XX

Congreso de 1964 las incidencias terminaron con un importante grupo de militantes disidentes fuera del Partido, acusados de "infiltraciones extrañas" que, según Raúl Ampuero, dejarían entrever la operación de sectores con filiación trotskista al interior del PS. Lo cierto es que entre los expulsados había dirigentes universitarios y seccionales completas del Partido y la Juventud que reclamaban la definición de una política de masas capaz de dar un sentido revolucionario a la política electoralista del FRAP. Las críticas se inscribieron en un escenario de radicalización ideológica más amplio y a escala global, producido por las intervenciones norteamericanas en países como Cuba, Vietnam, Guatemala y la organización de un polo maoísta a escala mundial después de la disputa Sino-Soviética. Estos y otros procesos promovieron la aparición de un discurso antiimperialista y tercermundista con rasgos insurreccionales más marcados que caló hondo tanto en el Partido como en un amplio sector de la izquierda.

Entre estos grupos primaba un diagnóstico que, en términos generales, creía imposible llevar adelante un proceso revolucionario sin generar una agresión armada del imperialismo norteamericano y sus aliados nacionales, haciendo necesario preparar al movimiento popular y sus organizaciones para un enfrentamiento que inevitablemente superaría los límites de la institucionalidad democrática. Por otro lado, reclamaron la necesidad de dotar al Frente de Trabajadores de una orientación revolucionaria dirigida hacia el mundo popular tal y como lo señalaban sus lineamientos originales, con el objetivo de transformar la convocatoria electoral en movilización revolucionaria. Más allá de las incidencias, la posición del Comité Central antes y después del XX Congreso fue sostener que en Chile, pese al escenario global de insurgencia armada, aún era posible iniciar cambios revolucionarios mediante la conquista pacífica del poder político por medio de las elecciones.

La campaña presidencial también dio cuenta del escenario internacional,

estando caracterizada por un fuerte discurso anticomunista que acusó al FRAP de pretender instalar en Chile un régimen totalitario de inspiración comunista. En la vereda del Partido Radical estos apenas fueron capaces de nominar un candidato sin fraccionarse, la derecha se organizó en un Frente Democrático conformado por Conservadores y Liberales, mientras que la Democracia Cristiana, como en 1958, volvió a nominar al senador Eduardo Frei. La candidatura democratacristiana proponía realizar cambios estructurales como la reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales sin la instalación de un gobierno totalitario a la usanza comunista, prometiendo una "revolución en libertad" que en muchos puntos coincidía con el programa frapista. La propuesta se sustentó en un lenguaje técnico y en una profunda reflexión ideológica cristiana que se ganó el apoyo de sectores medios y populares con medidas orientadas a grupos antes clásicamente captados por las izquierdas, permitiendo a la DC disputar la hegemonía conservadora del mundo cristiano, las posiciones centristas del debilitado radicalismo y la presencia del FRAP en el espacio sindical, universitario y el mundo social en general. En vista de la crisis radical, el contenido progresista de la DC y los acuerdos logrados en el parlamento durante la presidencia de Alessandri, las izquierdas intentaron nuevamente, aunque sin éxito, buscar los apoyos del centro progresista para la postulación de Allende.

En marzo de 1964, el PS logró elegir diputado por Curicó a Óscar Naranjo en una reñida votación complementaria. Los comicios fueron percibidos como un verdadero ensayo electoral a solo meses de la elección presidencial, por lo que sus resultados cambiaron drásticamente la forma en que se disputarían las elecciones. Conscientes de que Allende tenía posibilidades reales de alcanzar la presidencia, la derecha decidió bajar su candidatura para apoyar a Eduardo Frei, quien pese a ser resistido por su agenda progresista se transformó en un "mal menor" frente a la amenaza de un gobierno comunista. Si bien la DC insistió en que su candidatura actuaba con total independencia del apoyo derechista, en los hechos, la postulación de Frei intentó captar apo-

yos tanto en la derecha como en el centro, los influjos derechistas se dejaron sentir con un discurso y una orientación anticomunista mucho más marcadas despues de la elección de Curicó.

Las acusaciones contra el FRAP y su candidato repercutieron también sobre sus partidos, quienes contestaron al ambiente anticomunista reafirmando el sentido y contenido democrático de un eventual Gobierno de izquierda. El discurso oficial de la campaña destacó la alineación internacional de la DC con el imperialismo y la política de contención anticomunista promovida por los EE.UU. a través de la Alianza para el Progreso. No obstante, frente al ejemplo cubano y las críticas de los sectores revolucionarios, desde el FRAP también insistieron en la "excepcionalidad de la tradición democrática chilena" para defender la posibilidad de realizar un Gobierno socialista, revolucionario y antiimperialista sin la necesidad de una ruptura institucional o enfrentamiento social mayor. Con la intención de formar una mayoría progresista que sustentara esta posición, el FRAP morigeró las perspectivas revolucionarias de un eventual gobierno, realizando distintos llamados al centro para sumar a militantes, independientes y descolgados provenientes del radicalismo y grupos descontentos con el viraje de la DC.

Finalmente, Frei y la derecha ganaron las elecciones con el 56% de los votos mientras que Allende logro el 38% de las preferencias. Los resultados generaron una reacción casi inmediata en el PS, que en medio de las evaluaciones sobre la reciente campaña electoral comenzó a evidenciar posiciones divergentes sobre las causas de la derrota y la postura que debiese asumir el Partido frente al nuevo Gobierno. Mientras Raúl Ampuero llamó a traducir la buena votación del FRAP en la próxima elección parlamentaria, las posiciones críticas al Comité Central reclamaron contra el excesivo electoralismo y la moderación de las directivas frapistas durante la campaña, acusándolos de no marcar una diferencia clara entre el contenido imperialista y reformista de la postulación de Frei y el sentido marxista revolucionario de

la postulación izquierdista. También criticaron la subordinación de la política del Frente de Trabajadores a las orientaciones progresistas del Frente de Liberación Nacional, acusando a la directiva de Raúl Ampuero de abandonar las orientaciones clasistas en favor de una nueva y fracasada formula de conciliación. En medio de discrepancias sobre el rol que debería jugar el Partido en el "Gobierno revolucionario" de la Democracia Cristiana, el XXI Congreso realizado en 1965 dio cuenta del crecimiento y peso específico que asumieron las posiciones revolucionarias y las corrientes de "recuperación" al interior del Partido.

En una larga tesis política redactada por Adonis Sepúlveda se caracterizó al nuevo Gobierno por sus tendencias oligárquicas e imperialistas y se criticó abiertamente la tendencia reformista, entreguista y colaboracionista representada por el Comité Central saliente, al que responsabilizaron por las derrotas electorales de 1958 y 1964. En este escenario, el documento ratificó la política del Frente de Trabajadores, señalando el agotamiento definitivo de la etapa de colaboración con la burguesía y la necesidad de organizar un contingente popular capaz de dinamizar la acción de las clases explotadas hacia la construcción de un régimen socialista. La discusión de una nueva orientación política revolucionaria alineada con la estrategia del Frente de Trabajadores se tomó los espacios de debate interno, apareciendo voces que reclamaron la promoción de nuevas y más agudas formas de movilización popular capaces de dinamizar en un sentido revolucionario las propuestas progresistas del gobierno y la acción institucional del Partido. La idea era promover acciones que sacaran al PS del campo de la legalidad -tomas de terreno, huelgas sindicales y movilizaciones campesinas- con el fin de promover una conciencia rebelde e insurreccional entre las masas. Estas acciones en el campo social debían sumarse a una nueva actitud de oposición intransigente desde el parlamento, donde el Partido asumía el mandato de dar una proyección revolucionaria a las medidas progresistas que presentase a discusión el ejecutivo.

La radicalización tuvo un efecto sobre el conjunto de la política del Partido. La apertura hacia formas de movilización por fuera del campo electoral instaló, de forma lenta, pero firme, la idea de que el PS debía superar la creencia de que las elecciones eran la única vía para alcanzar el poder. Con esta premisa el Partido realizó una serie de modificaciones a su estructura, proclamando durante la conferencia de organización de 1966 una nueva orgánica leninista y de cuadros, que alineó la estructura con el objetivo de llevar el proceso político social chileno hacia nuevos estadios de movilización. El punto culmine de las definiciones fue el XXII Congreso realizado en la ciudad de Chillán los primeros días de noviembre de 1967. Las discusiones previas estuvieron marcadas por las posiciones revolucionarias y las caracterizaciones imperialistas del Gobierno de Frei, mientras que en lo internacional la revolución cubana volvió a sacudir el campo de las izquierdas con la Organización Latinoamericana de la Solidaridad, cuya primera conferencia fue realizada en agosto de ese mismo año. La OLAS fue pensada para coordinar los esfuerzos del campo revolucionario latinoamericano en sus luchas por la liberación y el socialismo, instalando un diagnóstico de la acción imperialista que destacó su carácter armado, intervencionista y alcance regional. Frente a este cuadro, la organización promovió un nuevo tipo de mentalidad estratégica a escala continental que buscó combatir la alianza entre oligarquías nacionales y el imperialismo con la unidad y resistencia armada de las fuerzas revolucionarias de cada país.

La promoción de una línea que, en lo medular, proponía dinamizar el proceso revolucionario continental mediante la agudización de los conflictos locales entre fuerzas populares, oligarquías y el imperialismo encontró rápidamente cabida en la dirigencia socialista. El PS fue uno de los principales promotores de la instancia en la región, presidiendo su sección chilena y trasladando la mentalidad estratégica continentalizadora a sus definiciones internas. Durante el XXII Congreso, el PS sintetizó la trayectoria de radicalización registrada desde la década de 1940 con las perspectivas de movili-

zación abiertas por la estrategia continental de la OLAS. Los documentos y tesis políticas adhirieron a un diagnóstico de carácter militar y por etapas, que reconocía la necesidad de escalar las formas de movilización desde la protesta hasta la lucha frontal y armada. La estrategia se basaba en un axioma promovido desde La Habana, que declaró la lucha armada como una etapa inevitable de los procesos de liberación nacional. En Chile, el PS aceptó esta posición, no obstante, declaró que el movimiento popular se encontraba en una etapa acumulación de fuerzas y que la revolución chilena aún contaba con la posibilidad de alcanzar el poder por medio de las elecciones.

El viraje socialista generó reacciones y alarmas entre el Gobierno, la derecha, sus aliados comunistas y al interior del mismo Partido. Además de volver a condicionar la política del FRAP a los partidos obreros, la declaración favorable a métodos de lucha por fuera de la legalidad fue criticada como un ensueño poco plausible y del todo ajeno a la realidad partidaria. El viraje terminó con dirigentes como Raúl Ampuero y Mario Garay fuera del Partido, para quienes la nueva estrategia resultaba simplista y rompía en los hechos con la idea de no subordinar a la organización a un mando ideológico o "estado mayor revolucionario" extranjero. Mientras que para dirigentes como Clodomiro Almeyda y Carlos Altamirano, el PS daba un salto cualitativo al sancionar de hecho que las elecciones no eran un camino excluyente para alcanzar el poder. Después de Chillán el socialismo agitaría con más encono las posiciones clasistas, reafirmando su tajante rechazo a la alianza con el centro y apoyando desde el parlamento y sus espacios de representación formal distintos movimientos de protesta. La radicalización y pureza clasista se volverían relativas en 1969, cuando comunistas, socialistas, radicales y antiguos miembros de la Democracia Cristiana fundaron la Unidad Popular.



## VII. LA REVOLUCIÓN CHILENA. EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA UNIDAD POPULAR

Los acuerdos de Chillan resultaron polémicos para la estrategia de poder trazada por la izquierda en el contexto FRAP y el discurso democrático que caracterizó a la alianza durante las campañas presidenciales de 1958 y 1964. La aceptación de la violencia como método y horizonte estratégico en la lucha por alcanzar el poder informó nuevos desencuentros con el Partido Comunista, quienes desde 1956 habían sancionado que las condiciones socio-institucionales del proceso político chileno mantenían las puertas abiertas para que el movimiento popular alcanzase el poder por medio de las elecciones y sin la necesidad de recurrir a un enfrentamiento social mayor. Siguiendo las nuevas posiciones dinamizadoras los socialistas apoyaron desde 1965 distintas formas de movilización popular -huelgas generales, paros sectoriales y movimientos de pobladores- orientadas a sacar el Partido de la legalidad burguesa y superar el excesivo electoralismo. Sin embargo, esto no implicó el final de la presencia en actos electorales ni clausuró el trabajo parlamentario. Aunque limitantes para la política revolucionaria, el Congreso y las elecciones fueron presentados como espacios para la agitación de las consignas y la denuncia de las contradicciones internas del sistema, dando una nueva proyección revolucionaria a la presencia del partido en los espacios de la "política burguesa".

Siguiendo esta reflexión, el PS sostuvo durante el Gobierno de Frei una política orientada a la radicalización revolucionaria de las reformas prometidas por la Democracia Cristiana, empujando desde el parlamento cuestiones como la ampliación de los terrenos expropiables y la aplicación de formas de propiedad "socialista" durante la discusión del proyecto de reforma agraria, la denuncia del trato aprobado por el Gobierno en el contexto de la chilenización del cobre y distintas acusaciones contra la orientación antipopular, pro-imperialista y represiva del Gobierno -particularmente después de las matanzas de El Salvador en 1966 y Pampa Irigoin en 1969-. Después del XXII Congreso el PS agitó la formación de un Frente de Trabajadores Revolucionario, llamando al conjunto de fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas

en oposición frontal al sistema establecido. Esta política se tradujo en una polémica posición durante las elecciones complementarias de diciembre de 1967, en la que el PS decidió no apoyar al candidato radical-comunista Alberto Baltra aduciendo que el PC buscaba un nuevo acuerdo electoral con el centro progresista. El socialismo decidió restarse de hecho de las elecciones al no apoyar ninguna candidatura ni presentar una propia, sin embargo, utilizó la campaña como un espacio para denunciar los límites de la institucionalidad burguesa y la desnaturalización que significaba la maniobra electoral del PC para los fines anti oligárquicos y antiimperialistas de la izquierda.

Los efectos de la radicalización ideológica durante la década de 1960 no fueron un fenómeno exclusivo del socialismo. Distintos grupos escindidos del PS y el PC derivaron en la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1965, mientras que los radicales experimentaron un proceso interno que terminó en 1967 con el Partido declarándose socialista y buscando nuevos entendimientos electorales con la izquierda marxista. Por último, la oficialista Democracia Cristiana experimentó la fuga de una parte de sus bases izquierdistas dando origen al Movimiento de Acción Popular Unitaria en 1969. En este escenario, durante su pleno de julio de 1969 el PS dio un nuevo giro a su política aliancista. La instancia dio continuidad a las posiciones sancionadas durante el Congreso de Chillán y constató la agudización de las contradicciones entre fuerzas populares y el imperialismo bajo la administración de Frei. Entre las manifestaciones más destacadas del fenómeno se contaba la aparición de una nueva actitud insurgente en el movimiento popular -refrendada en la agudización de la protesta- y la aparición de nuevos sectores antiimperialistas con conciencia anticapitalista. Esto incluía a los distintos grupos revolucionarios formados a la izquierda del FRAP, pero también al izquierdizado Partido Radical y a los grupos democratacristianos escindidos.

En este contexto fue que en octubre de 1969, el PS y el PC lanzaron una

convocatoria a las fuerzas y organizaciones con un perfil antiimperialista, anti oligárquico y anti feudal para la formación de un nuevo referente de izquierda con miras a la elaboración de un programa y la proclamación de una candidatura unitaria para competir en las elecciones presidenciales de 1970.

El llamado fue contestado por el Partido Radical, la Acción Popular Independiente, el Partido Social Demócrata y el Movimiento Popular de Acción Unitaria, no obstante, la idea de sumar a la Democracia Cristiana quedaba descartada por sus vínculos con el imperialismo y alineación con la oligarquía desde el Gobierno. El PS caracterizó la alianza por su unidad programática y la orientación anticapitalista de sus componentes, limitando la extensión de esta al acuerdo previo de sus partes con el programa y dirección de las fuerzas de avanzada. Además, intentó imprimir a la campaña un sentido de agitación y lucha de clases que implicaba denunciar la administración de la Democracia Cristiana, la de Jorge Alessandri -que volvía a presentarse a las elecciones como candidato de la derecha- y proyectar los acuerdos dinamizadores del XXII Congreso al contexto de las elecciones presidenciales.

En términos generales la Unidad Popular agitó un programa antiimperialista, con énfasis en la nacionalización de los recursos naturales, la instalación de una sólida industria nacional y distintas reformas al sistema democrático-representativo, siguiendo la misma estrategia que había caracterizado a los partidos de izquierda desde 1956: ganar por medio de las elecciones el control de los espacios democrático-burgueses e impulsar transformaciones estructurales capaces de inaugurar una etapa de transición hacia el socialismo. Como en 1964, la campaña volvió a estar marcada por el anticomunismo y las acusaciones contra Salvador Allende -quien era candidato por cuarta vez- como el representante de fuerzas totalitarias, extranjerizantes y antidemocráticas. La DC, por su parte, presentó la candidatura de Radomiro Tomic, representante del ala más progresista del Partido que propuso llevar la

"Revolución en Libertad" de Eduardo Frei hacia una nueva senda "socialista comunitaria".

Las elecciones dieron la victoria a Salvador Allende por un estrechísimo margen de votos que debía ser ratificado, tal y como sucedió en 1949 y 1958, por el Congreso Pleno de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1925. Sin embargo, por primera vez en la historia, la ratificación estuvo condicionada a la firma de un polémico estatuto de garantías constitucionales, el que además de no poseer ningún valor reglamentario fue redactado por la DC y otros parlamentarios opositores con la finalidad de comprometer al obierno entrante con cuestiones como el respeto del régimen de propiedad y la legalidad democrática. Los partidos de derecha se opusieron desde el primer momento a que la Unidad Popular asumiese labores de Gobierno. Mientras un grupo de parlamentarios llamó a desconocer los resultados votando por Jorge Alessandri en el Congreso Pleno, otros derechamente apostaron por el sabotaje, perpetrando acciones orientadas crear un clima de inestabilidad que propiciase la intervención de las Fuerzas Armadas como el frustrado secuestro del general Rene Schneider, quien fue asesinado en medio de la votación que ratificaba los resultados de las elecciones. Finalmente, Allende fue nombrado presidente de la república con el 78% de los votos del órgano legislativo.

Desde el PS, el cuadro político antes descrito fue comprendido como una agudización de la lucha de clases en Chile, intensificada por efecto de la victoria de la izquierda en las ultimas elecciones presidenciales. También evidenciaba la precaria posición de los partidos de la Unidad Popular en sus afanes de transformación revolucionaria, los que pese a haber alcanzado el Gobierno ahora debían conquistar el poder. La conquista del poder implicaba la liberación efectiva del capital extranjero, la destrucción de la superestructura del Estado capitalista aún vigente después de las elecciones, arrebatar el control económico a la oligarquía para ponerlo en manos de

los trabajadores y la creación de un nuevo Estado de derecho socialista. Con este tipo de medidas el PS planteaba que su participación en el ejecutivo no podía limitarse a un cambio en los nombres y partidos a cargo de la administración, debiendo promover la dinamización del proceso revolucionario en curso empujando aquellas transformaciones encaminadas a hacer de la revolución socialista un proceso irreversible. La realización de estas metas, no obstante, su aparente claridad, presentaban una serie de problemas entre los que se contaba la composición social pluriclasista de la alianza de Gobierno, la supervivencia de las instituciones, prácticas y estructuras de poder demo-burguesas después de la elección de Allende y una oposición interesada en cerrar el paso a cualquier medida de orientación socialista.

En enero de 1971, durante su XXIII Congreso, los socialistas profundizaron este diagnóstico estableciendo de manera clara los fines y caminos a promover desde sus posiciones en el ejecutivo. Inaugurado con un discurso del presidente Allende, las sesiones comenzaron a exhibir nuevas desavenencias internas sobre la conducción y perspectivas revolucionarias que debía asumir el Gobierno. Si bien el propio Allende llamó a la disciplina y reafirmó su compromiso de "cumplir y hacer cumplir la ley" desde la presidencia, el voto político de la instancia insistió en la necesidad de operar transformaciones orientadas a superar la legalidad burguesa. En términos generales, el Gobierno fue caracterizado como un momento en el que las instituciones del "Estado burgués" estaban en franca disputa. Mientras que el movimiento popular había logrado controlar una parte de dicha institucionalidad al ganar las elecciones presidenciales, el problema político radicaba en que el resto de las instituciones -el parlamento, los tribunales- seguían bajo control de las clases antagónicas y comprometidas con el orden vigente. Tomando en cuenta lo anterior, el PS constataba la agudización de la lucha de clases y los límites de la institucionalidad política como elementos característicos del período, planteando la necesidad de dinamizar la acción del ejecutivo mediante una orientación y dirección política de clase, la utilización de todos los

mecanismos ofrecidos por la legalidad burguesa y la inclusión efectiva del movimiento de masas al ejercicio del poder para asegurar el cumplimiento del programa.

El XXIII Congreso dio continuidad a la política dinamizadora desarrollada durante la década de 1960 en torno a la estrategia del Frente de Trabajadores, proyectándola hacia las labores de Gobierno. La elección de una estrategia que promovió la acción de masas no significaba renunciar a las acciones institucionales, las que debían empujar los límites de la legalidad vigente también desde la acción sistémica. Sin embargo, la persistencia de una línea clasista revolucionaria se transformó en un problema para la estrategia sistémica de la Unidad Popular y el propio presidente Allende, quienes buscaron distintos acuerdos con la Democracia Cristiana en el parlamento y abogaron por una inclusión ordenada del contingente popular a las tareas de Gobierno. De esta forma, se perfilaron dos posiciones que dividieron las opiniones del PS y demás organizaciones integrantes de la Unidad Popular. Por un lado, el PC, el PR y el propio presidente Allende insistieron en mantener el proceso de transformaciones dentro de los límites de la institucionalidad vigente -lo que no significaba que estos límites no pudieran ser reformados mediante acuerdos políticos transitorios con la oposición democratacristiana, como muestran las nacionalizaciones y la creación del área de propiedad social-. Por otro, los socialistas y organizaciones izquierdistas dentro y fuera de la UP abogaron por un ejercicio revolucionario de la presidencia orientado a tensionar la institucionalidad demo-burguesa y a la inclusión efectiva del movimiento de masas al Gobierno para perfilar un nuevo y revolucionario tipo de ejercicio democrático: el poder popular.

La creación y ejercicio de un **nuevo tipo de poder popular** fue una posición teórica **fundacional del programa de la UP**, no obstante, durante el Gobierno de Allende su invocación fue un asunto conflictivo. La inclusión del movimiento de masas al ejercicio del Gobierno promovía la participación del con-

tingente popular organizado a través de la Central Única de Trabajadores y las empresas de la nueva Área de Propiedad Social. Sin embargo, las expectativas generadas por el triunfo de Allende en 1970, el proceso de nacionalizaciones y la creación de la nueva economía redundaron en tomas de terreno, fábricas y lugares de trabajo que superaron con creces los márgenes iniciales propuestos por el Gobierno para la manifestación de este tipo de poder. La espontaneidad, radicalidad y extensión de estas acciones fue percibida con alarma por el mismo Gobierno, que comenzó a exigir disciplina ante su incapacidad para imprimir una dirección política clara al movimiento de masas. La posición socialista favorable al ingreso de las masas al poder fue una versión más radical de las posiciones dinamizadoras, que abogó por la organización del movimiento popular articulado en torno al Gobierno -las bases sindicales, los comités de abastecimiento y precios, los consejos industriales y obreros del Área de Propiedad Social, etc.- para impulsar desde abajo y por fuera de las instituciones las transformaciones estructurales que, ya sea por las influencias pequeño-burguesas al interior de la UP o por la acción de la oposición, no había sido posible lograr desde la institucionalidad burguesa. El diagnostico se alineaba con la intención de sacar el proceso de sus vías exclusivamente legales, promoviendo una lectura de la organización de hecho y espontánea de las masas como representante genuina y elemento directivo del proceso revolucionario en curso. La posición generó distintas discrepancias entre la directiva socialista, el presidente Allende y los partidos de la Unidad Popular.

La lectura sobre el *potencial revolucionario de la organización de masas en desmedro de la política institucionalizada* fue una posición que adquirió popularidad entre los partidos de izquierda al mismo tiempo que el conflicto político que caracterizó al Gobierno de Allende comenzó a agudizarse. Tras el paso definitivo de la Democracia Cristiana a la oposición parlamentaria en 1971, la cuestión de las masas asumió un espacio fundamental en la política socialista, relacionada con los objetivos dinamizadores y las realiza-

ciones revolucionarias proclamadas por el Partido como orientación de su acción en el Gobierno. Sin embargo, la elección de esta estrategia no significó en ningún caso la hegemonía socialista sobre un movimiento popular que en los hechos exhibió un alto nivel de autonomía, protagonizando acciones que superaron con creces los límites institucionales propuestos por la UP y la conducción política del PS. La preferencia por el movimiento organizado tampoco sacó al Partido completamente de la legalidad, por el contrario, frente a la agudización de la lucha de clases que caracterizó todo el periodo del Gobierno de Allende y la radicalización de las posiciones de derecha dentro de la institucionalidad, la estrategia también contemplaba utilizar los resortes institucionales para tensionar desde dentro las transformaciones estructurales que hicieran el proceso revolucionario una realidad "irreversible". En este escenario, el discurso de la directiva socialista buscó, por un lado, la inclusión del movimiento popular como elemento garante del contenido clasista y revolucionario del Gobierno y, por otro, la promoción de acciones en el campo institucional que permitiesen sustentar y dinamizar la labor del ejecutivo mediante la participación en elecciones, la promoción de proyectos de ley y hasta acusaciones constitucionales contra otros poderes del Estado.

Durante el año 1972 las acciones de masas asumieron mayor protagonismo y se transformaron en el material de distintas polémicas sobre la conducción del proceso. En julio distintos partidos y adherentes al gobierno de la UP en la ciudad de Concepción organizaron una polémica "Asamblea del Pueblo". La instancia, que contó con presencia de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el PS, el MAPU y la Izquierda Cristiana, asumió una posición de crítica hacia el rol contrarrevolucionario jugado por el parlamento y sus orientaciones de clase, alzándose como un ejercicio de poder popular y deliberativo que desconocía en los hechos la institucionalidad burguesa, su poder legislativo y que amenazaba con transformarse en un poder paralelo. Allende y el Partido Comunista fueron los primeros en

criticar la instancia, la que acusaron como una "maniobra divisionista", "romántica" y "voluntarista", ajena a la realidad del proceso y sin un examen adecuado de la correlación de fuerzas que por esos días se enfrentaban en el país. Durante el mes de octubre, apoyados políticamente por la DC y el Partido Nacional y económicamente por la CIA norteamericana, el gremio de los camioneros protagonizó una paralización de actividades que afectó la ya delicada situación económica con el desabastecimiento de alimentos, combustibles y otros enseres básicos. La paralización fue inicialmente reivindicativa, sin embargo, pronto se sumaron industrias y medios de comunicación opositores que dieron una proyección política al movimiento, exigiendo el final del Gobierno y acusando su inconstitucionalidad. Mientras el ejecutivo califico el movimiento como "político, ilegal y sedicioso" operando respuestas legales como el estado de sitio y la detención de sus cabecillas, desde el PS la respuesta fue una vez más la inclusión de las masas al poder.

Además de los decretos, la respuesta de la UP a la paralización vino principalmente desde el movimiento político de masas. Las empresas bajo control obrero no dejaron de funcionar, mientras que los comités de abastecimiento
y precios lograron morigerar la crítica situación de desabastecimiento.
Ante la organización espontánea de los trabajadores para resolver problemas
cotidianos como el transporte público y la distribución de enseres, no pocos
industriales decidieron no sumarse al paro, temerosos ante la experiencia de
consejos obreros que decidían espontáneamente asumir el control de sus
empresas en una clara manifestación de apoyo al proceso. Desde el PS el cuadro fue evaluado como una verdadera primavera proletaria, mostrando el
alcance del movimiento social a favor del Gobierno y el peso específico alcanzado
por las organizaciones de masas en el proceso, logrando actuar de hecho como
un verdadero poder paralelo que permitió continuar con la marcha del
país pese a la movilización.

Los hechos fueron profundamente analizados durante el pleno de noviembre

de 1972. La instancia sancionó que la agudización de la lucha de clases por parte de la burguesía y el imperialismo había alcanzado niveles superiores que dejaban al país al borde de una guerra civil. Por otro, se observó que la composición del movimiento sedicioso de octubre -capas medias y grupos patronales- contrastaba con la orientación de clase que sirvió al movimiento que se alineó del lado del Gobierno. Frente a este cuadro, los socialistas criticaron la falta de canales de comunicación que ligasen al movimiento de masas con el poder ejecutivo, la burocratización y el aterrizaje de tendencias reformistas en el seno de la Unidad Popular. Considerando lo anterior, el PS propuso aplicar mano dura contra los instigadores del movimiento sedicioso, copar las organizaciones sociales ante los intentos de la derecha por penetrar estos espacios, cumplir con el programa de la UP sin transacciones de ningún tipo y virar el trabajo del Partido hacia el movimiento de masas con el fin de dar un nuevo paso en el desarrollo de un poder autónomo de los trabajadores.

Sobre este último punto, la propuesta fue la creación de Comandos Comunales, organismos independientes de las direcciones del Gobierno y con directivas salidas desde sus propias experiencias prácticas, que sirviesen como instancias de coordinación, dirección y acción revolucionaria del amplio movimiento social alineado con el Gobierno. Siguiendo la consigna de que "sea la clase trabajadora misma quien resuelva sus propios problemas" se pretendía dar continuidad al movimiento de masas que salió a responder a la paralización de la derecha y, al mismo tiempo, superar los problemas de coordinación entre estas organizaciones y el Gobierno.

Después de la paralización de los camioneros durante los meses de octubre-noviembre de 1972 las opiniones de los partidos de la UP evidenciaron **nuevas y más agudas diferencias** sobre el tránsito y pasos futuros a dar por el proceso. Por un lado, la directiva socialista se inclinó por la **aplicación sin transacciones del programa revolucionario**, la creación al más breve plazo

del poder popular, ampliar el área social hasta terminar de manera definitiva con los monopolios y poner fin a cualquier negociación con la oposición atrincherada en el parlamento y los tribunales. Por otro, Allende y el PC llamaron a consolidar lo avanzado, limitando la ampliación del "área social" y manteniendo puentes con los sectores progresistas en el parlamento aún favorables a la aplicación de reformas estructurales. Con estas discusiones en pleno desarrollo, el Gobierno enfrentó las elecciones parlamentarias de 1973 con la esperanza de lograr una mayoría relativa que le permitiese destrabar la discusión parlamentaria y continuar con la aplicación del programa. Desde la vereda opositora las elecciones fueron afrontadas en un frente común que reunió al Partido Nacional, la Democracia Cristiana y grupos radicales descontentos en una Confederación Democrática, cuya apuesta para las parlamentarias fue lograr una mayoría para derrocar a Allende desde el parlamento. En este escenario, las elecciones asumieron pronto un tonó plebiscitario que dio cuenta de la polarización y gravedad del desencuentro que por entonces se tomó la discusión política nacional.

Los resultados de las elecciones fueron, en principio, positivos para el Gobierno de la Unidad Popular, que logró aumentar su representación en el parlamento. Sin embargo, esto no fue suficiente para resolver el estancamiento político: con el 44,23 % de los votos la UP seguía dependiendo de la DC para avanzar en su programa, mientras que la derecha agrupada en la Confederación, con un 55,49% de los votos, no contó con la mayoría necesaria para destituir al presidente Allende desde el parlamento. El PS, por su parte, experimentó un explosivo crecimiento de su representación parlamentaria, convirtiéndose en la fuerza más votada de la UP y la principal fuerza izquierdista en el parlamento con el 18.37% de los votos. Para el Secretario General, Carlos Altamirano, el escenario cerraba definitivamente el camino legal para la derecha, anticipando un aumento de su agresividad y nuevas acciones dirigidas a socavar la estabilidad del Gobierno y promover la guerra civil. En este contexto el llamado fue al fortalecimiento del poder

popular a través de sus organizaciones sociales, abogando por la creación de un poder paralelo que en un futuro cercano permitiese remplazar la institucionalidad tradicional y superar de hecho la etapa democrático-burguesa que había caracterizado al Gobierno y directivas políticas de la UP.

En los hechos, la elección de marzo dio continuidad al cuadro político de estancamiento institucional que caracterizó al gobierno después de 1971. El bloqueo parlamentario, el conflicto permanente con los tribunales de justicia y la emergencia de nuevas acciones de masas desde el campo opositor comenzaron a perfilar un enfrentamiento decisivo con la burguesía. Así, a inicios de 1973, mientras los partidos de la UP se esmeraban en parar una guerra civil, el PS constataba el inicio de una nueva etapa para el proceso revolucionario chileno, marcada por las opciones dicotómicas de "socialismo o fascismo". La convocatoria popular del socialismo en este contexto insistió en la necesidad de hacer el proceso revolucionario una realidad irreversible, "avanzar sin tranzar" en el cumplimiento del programa de la UP y hacer frente a una insurrección contra el Gobierno constituido que ya parecía inevitable. Casi como una profecía autocumplida, la insurrección llegaría finalmente el día 11 de septiembre de 1973, cuando aviones de guerra, tanques y soldados de infantería decidieron la ilegalidad del ejecutivo bombardeando la casa de Gobierno y reprimieron a balazos el movimiento social que debía, más que defender la presidencia de Allende, asegurar el cumplimiento de su programa y la continuidad del proceso. Pese a una valiente y desorganizada defensa en algunos cordones industriales capitalinos, lo cierto es que la oposición democratacristiana se mostró inflexible en su resolución de no aceptar una salida distinta al fin del gobierno, mientras la acción autónoma y revolucionaria de las masas sobre la que tanto había descansado el PS nunca llegó a registrarse. La Unidad Popular, en sus vías revolucionarias y reformistas, había sido derrotada.



## **POST SCRIPTUM**

Todo texto de profundidad y calidad convoca a una reflexión necesaria luego de su lectura. Los puntos suspensivos de un final deben asumirse como un desafío para quien, desde la militancia política, se aproxima a la historia. Como advierte Walter Benjamin, no basta con aprender de la historia tal como "realmente fue"; es preciso aprehenderla como ejemplo material de lo posible en el pasado y como punto de apoyo para la acción en el presente.

La historia de nuestro partido —y del movimiento socialista en general— se ha nutrido de grandes gestas colectivas. Esa memoria, sin embargo, no es únicamente un repertorio de triunfos. Con frecuencia hemos debido aprender a militar en los márgenes de la derrota y a rearmar, con mejores herramientas, las luchas del presente. De ahí que el conocimiento histórico resulte central: no como simple inventario de acontecimientos, sino como camino para repensar la significancia de nuestra revolución en el lugar concreto donde se plantan los pies de quienes la organizan. Desde la derrota de la Unidad Popular, sumada a la crisis del Estado de bienestar socialdemócrata y a la caída de los socialismos realmente existentes, pareciera haberse clausurado —en la izquierda mundial y, de modo particular, en la chilena— la posibilidad de imaginar una transformación de carácter poscapitalista. En ese tránsito se fue imponiendo, a menudo, una estetización de lo propio, una celebración sin consecuencias materiales, que abrió la puerta a la resignación. Esta deriva cultural no es menor: cuando la política se reduce a formas y símbolos, el pragmatismo se vacía de horizonte y la crítica se vuelve contemplación. Quienes hemos editado estos libros habitamos un tiempo intermedio marcado por un vacío absurdo. Somos una generación que no ha vivido en silencio, pero que, en no pocas ocasiones, ha sujetado sus experiencias como traumas. En el mejor de los casos, aprendimos a reírnos del sinsentido de una época que parecía haber concluido para siempre. Ese es el telón de fondo desde el cual leemos este documento de historia del Partido Socialista de Chile: no como un archivo inmóvil, sino como la crónica de una vida colectiva hecha de avances y retrocesos, de victorias y de reveses que, en su conjunto, pueden convertirse en un motor de movilización para la militancia de ayer y de hoy.

No basta, por tanto, el pesimismo intelectual. Tenemos el deber del optimismo: no un optimismo ingenuo, sino uno que nace del balance riguroso y de la organización perseverante. La vía de construcción de la Unidad Popular fue una larga marcha de errores y aciertos. Muchos militantes históricos no pudieron acompañar la instalación del primer gobierno socialista democrático del mundo; sin embargo, sería imposible explicar ese logro sin la constancia de quienes, en distintas etapas, sostuvieron la esperanza, la estructura y la disciplina. En ese sentido, somos un continuo que integra triunfos y derrotas, aprendizaje y memoria, capacidad autocrítica y voluntad de futuro.

Por duras que sean las derrotas más recientes, permanece un trazo irreversible en nuestra trayectoria: la perspectiva imperecedera de la transformación social como práctica concreta que se organiza y se ejecuta. Somos dueños de nuestras derrotas —porque las asumimos y las comprendemos—, pero también de nuestras oportunidades y de nuestros triunfos, porque sabemos convertir la experiencia en método y la convicción en programa. Esa apropiación soberana del propio recorrido es lo que distingue a una militancia madura de una mera comunidad de opinión. Este libro, en consecuencia, nos permite retomar algo que había quedado trunco. Durante años, una corriente interna discurrió sin dirección clara, como un malestar inconcluso. La lectura de nuestra historia, con sus nombres, tensiones, apuestas y coordenadas estratégicas, nos autoriza a volver sobre el silencio de la ausencia y a enfrentar la incomodidad de reconocer que no alcanzamos a construir una alternativa de transformación a la altura de las necesidades. Al mismo tiempo, también intuíamos —sin certezas plenas— que había algo más por hacer. El gesto que aquí proponemos es pasar del idealismo paralizante a las convicciones alcanzables y urgentes que movilizan lo que denominamos un Allendismo posible: no una nostalgia, sino

una orientación práctica que articula democracia, justicia social y soberanía popular en las condiciones del presente.

Este continuo breve, hilado a partir de la sólida exposición de Pablo Garrido, es, ante todo, un punto de análisis militante. La historia quieta en los anaqueles solo muestra un campo de batalla después de la tormenta; la contemplación de las heridas, por sí sola, se la dejamos a los idealistas derrumbados. Lo que aquí se reclama es otro gesto: hacer de nuestra historia una guía para la acción, un mapa para la reorganización, una escuela para el coraje político. Volver sobre nuestras derrotas —e incluso sobre nuestros logros— no es recrearse en la melancolía, sino afirmar que el socialismo chileno ha sabido levantarse, corregirse, aprender y persistir. No tememos mirar una historia digna para señalar errores, porque ese examen es la condición de la mejora. Tampoco tememos reconstruir, las veces que sea necesario, los aciertos que nos han permitido abrir cauces de democratización real, ensanchar derechos y disputar el sentido común. Volvimos y seguiremos volviendo a retomar lo nuestro: lo construido desde el movimiento socialista, desde el pueblo de Chile y desde el Partido Socialista de Chile. Ese retorno no es circular; es espiral: vuelve al punto de partida, pero en otro nivel de madurez, organización y claridad estratégica. La invitación final es nítida. Si los puntos suspensivos convocan a continuar la frase, nuestra tarea es convertir esa continuidad en práctica colectiva. Aprehender la historia como ejemplo material de lo posible —y no sólo como relato de lo sucedido— significa reponer la organización como método, la crítica como disciplina y la unidad como horizonte. Significa recordar que la memoria no es archivo sino músculo: se ejercita en la lectura, se fortalece en la discusión y se verifica en la acción. La historia del socialismo chileno, con su pluralidad de trayectorias, confirma que no hay destino escrito y que el porvenir depende de la inteligencia con la que sepamos articular programa, ética y organización. Entre el derrotismo estético y el optimismo ciego, elegimos el realismo militante: el que mide fuerzas, aprende del pasado, define prioridades y construye mayorías. Ahí radica, todavía, la promesa del Allendismo posible: en hacer del recuerdo una palanca y de la convicción una práctica cotidiana, capaz de volver a abrir horizonte allí donde otros solo ven cierre.

## LOS EDITORES







El socialismo chileno es una de las culturas políticas más sólidas de nuestra patria, nuestro Partido y nuestra Juventud se inscriben como el instrumento histórico de los trabajadores manuales e intelectuales para transformar su realidad. Los militantes que entran cada día a las filas del socialismo, deben ser capaces de darle futuro a una larga trayectoria de lucha, derrotas y triunfos. Darle futuro a su orgánica, a su pensamiento y a su historia.

La colección, Cuadernos de Formación, aspira a otorgar las herramientas necesarias a su militancia para enfrentar los desafíos del siglo XXI, pero enfrentar no reside sólo resistir contradicciones las en de contemporáneas la humanidad. consiste fundamentalmente en asumir esas contradicciones para proponer una alternativa de sociedad, donde la solidaridad y la igualdad constituyan su horizonte de libertad, con el pueblo como protagonista de esa alternativa